

La representación cartográfica de la violencia en las ciencias sociales colombianas*

**OLIVIER PISSOAT
VINCENT GOUËSET**

Después de cuatro décadas, Colombia aparece entre los primeros lugares en las estadísticas generales sobre la violencia en el mundo. Aun si las clasificaciones establecidas por los grandes organismos internacionales plantean los problemas de orden metodológico o ético (pertinencia de indicadores obtenidos, confiabilidad de los datos según los países, comparabilidad de las cifras nacionales en contextos sociales y culturales muy diferentes...) el elevado nivel de violencia que afecta a Colombia no se pone en duda. El análisis de este fenómeno está, por lo demás, solidamente arraigado en el campo de las ciencias sociales colombianas, tanto entre los intelectuales colombianos como entre los extranjeros¹. Así mismo, la violencia ha adquirido un estatuto singular llegando a constituir un campo de estudio específico, apresura-

damente elevado al rango de "violentología" en el discurso mediático².

Entre los numerosos estudios sobre la violencia, las aproximaciones de tipo geográfico –en particular las representaciones cartográficas– fueron relativamente escasas hasta una fecha reciente, cuando, paradójicamente, la dinámica propiamente territorial de los hechos sociopolíticos y de los actores involucrados aparecía, de golpe, como una evidencia para todos los investigadores que han abordado el tema. Por otra parte, la diversidad y la riqueza de las fuentes de información disponibles hicieron posible, después de un largo tiempo, la realización de un trabajo estadístico y cartográfico sobre la violencia. La debilidad institucional de la geografía en el sistema universitario colombiano, así como el relativo distanciamiento de los

Olivier Pissotat
Doctor en
geografía, UMR
REGARDS
(CNRS-IRD),
Bordeaux,
Francia.

Vincent Gouëset
Maestro de
conferencias en
geografía, UMR
ESO (CNRS),
Université de
Rennes 2,
Francia.

(*) Una primera versión de este texto fue publicada en francés en: *Cahiers des Amériques Latines*. No. 37, febrero de 2002. Traducción al español, M. Victoria Mejía D.

(1) En su obra *Los colombianistas*, Peralta y La Rosa ponen en evidencia la importancia del tema de la violencia en el estudio de la realidad colombiana. Véase: Peralta, Victoria y La Rosa, Michael. *Los colombianistas*. Bogotá: Planeta, 1997. Algunos autores, provenientes en su mayoría de universidades anglosajonas, se encuentran igualmente trabajando el tema de la violencia y merecen ser citados aquí. Algunos de ellos son politólogos (P. Oquist: EU) o historiadores (M. Deas: Gran Bretaña; E. Hobsbawn, J. Henderson, C. Berquist: EU; C. Le Grand: Canadá). La investigación francesa está representada por P. Gilhodès (politólogo) y sobre todo por D. Pécaut (sociólogo), uno de los más grandes especialistas sobre el tema en el mundo.

(2) Apelación simplificante, e incluso reduccionista, utilizada por la prensa a partir de 1987. Ésta se constituyó en el concepto más didáctico de "Pblémologie" creado por G. Bouthoul en 1946, el cual se define como el estudio científico de la guerra como fenómeno social.

geógrafos y las pocas instituciones y especialistas que trabajan el tema, no son ajenos a estos vacíos.

Las cosas han cambiado recientemente y, después de los años ochenta, han contribuido a una difusión del uso de mapas, de croquis y de otras representaciones gráficas en los estudios de la violencia. Tal trivialización, ligada especialmente a los avances de la informática y a las facilidades que ofrece la cartomática, se observa tanto en el campo de las ciencias sociales como en la gran prensa, o en los textos y documentos oficiales.

La proliferación de los mapas de la violencia permite plantear dos preguntas fundamentales: la primera tiene que ver con el "buen uso" de la cartografía: ¿Con qué objetivo y en qué contexto institucional se produce esta representación de la violencia? La segunda pone de manifiesto el problema más general de las implicaciones semánticas de la violencia como tal: ¿A qué se refiere?, ¿a qué hechos sociales, políticos o culturales se remite este vocablo impreciso? La realidad y la representación de la violencia están íntimamente ligadas, aun si resulta ilusorio pensar que la segunda puede ser una traducción "objetiva" de la primera. En realidad, ella no corresponde más que a una determinada imagen de la violencia, construida socialmente, cargada de significado e influida por el punto de vista de quienes la producen.

Es precisamente esta cuestión de las "imágenes" cartográficas de la violencia la que abordamos en el marco de este artículo, que se dedica, en primer lugar, a contextualizar la percepción de la violencia y el recurso a la herramienta cartográfica por parte de los investigadores colombianos; después se detiene en los diferentes métodos utilizados para expresar cartográficamente la violencia y sus actores en la producción científica

colombiana. Los mapas que se retoman en este escrito son, en su mayor parte, mapas originales colombianos (algunas veces modificados para mejorar su legibilidad), o realizados a partir de fuentes o de autores colombianos.

LAS VIOLENCIAS A LA CARTA

Las representaciones "geográficas" de la violencia

Buscando afanosamente visualizar la ubicación espacial de los procesos en juego, los investigadores colombianos han propuesto de manera espontánea una "geografía" de la violencia. Allí se discute una constante que se vuelve a encontrar en las primeras representaciones cartográficas al comienzo de la década de los sesenta.

Los títulos de las figuras de la tabla I demuestran la intención de sus autores (principalmente de los sociólogos) de poner en evidencia la dimensión "geográfica" del fenómeno; una aproximación que se limita, de hecho, a una estricta localización de los hechos de violencia en el mapa, sin tratar verdaderamente de mostrar "en qué medio, con quién, en qué tejido de relaciones, de entornos y de determinaciones" se inscriben los actos presentados³. Además, la selección de indicadores y el tipo de violencia allí contenido no es neutral. Así, cuando aparece el primer estudio sistemático de la violencia, con la publicación del libro dirigido por Monseñor Guzmán, *La violencia en Colombia*⁴, el fenómeno representado es la Violencia de los años cincuenta. La cartografía de la obra agrupa, entonces, bajo la misma denominación de "violencia" hechos diferentes (matanzas, torturas, contribuciones forzosas diversas...), mientras que el texto centra su análisis en la lucha entre las dos facciones, liberal y conservadora. La figura seleccionada en este artículo es un mapa

⁽³⁾ Brunet, Roger. *Les Mots de la Géographie, Dictionnaire Critique*. Montpellier-Paris: Reclus-La Documentation française, 1993, p. 306.

⁽⁴⁾ Guzmán, Germán; Fals, Orlando y Umaña, Eduardo. *La violencia en Colombia. Estudio de un proceso social*. Bogotá: Punta de Lanza - Universidad Nacional de Colombia, Vol. I, 1962.

Lámina I: Unas "geografías" de la violencia

Fig. I.1: G. Guzmán et al., 1962: 97.



Fig. I.2: A. Reyes, 1999: 1.

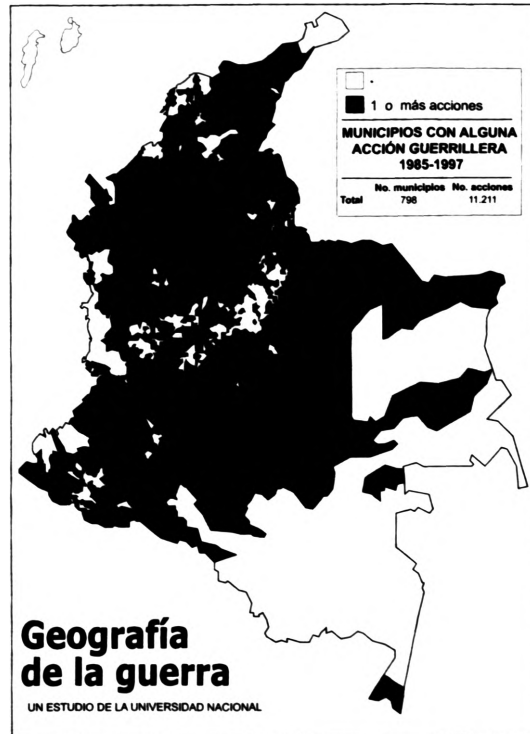


Fig. I.3: C. Echandía, 1999a: s.p.

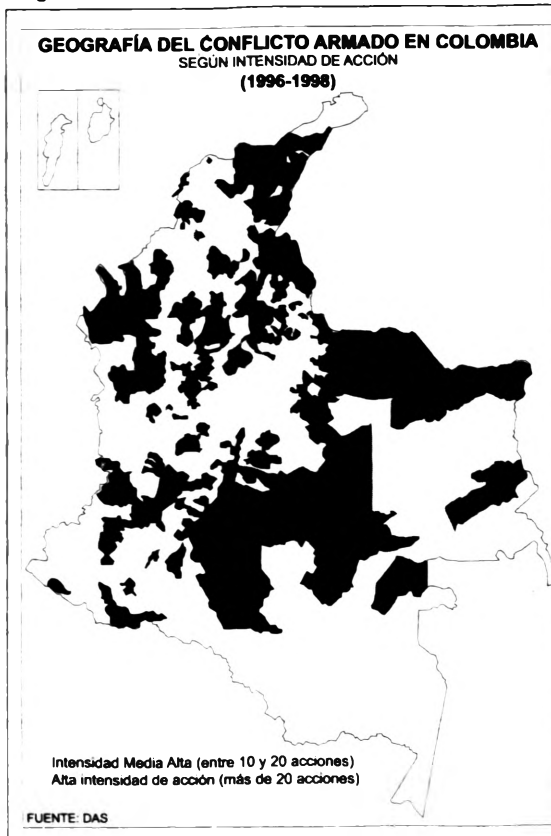
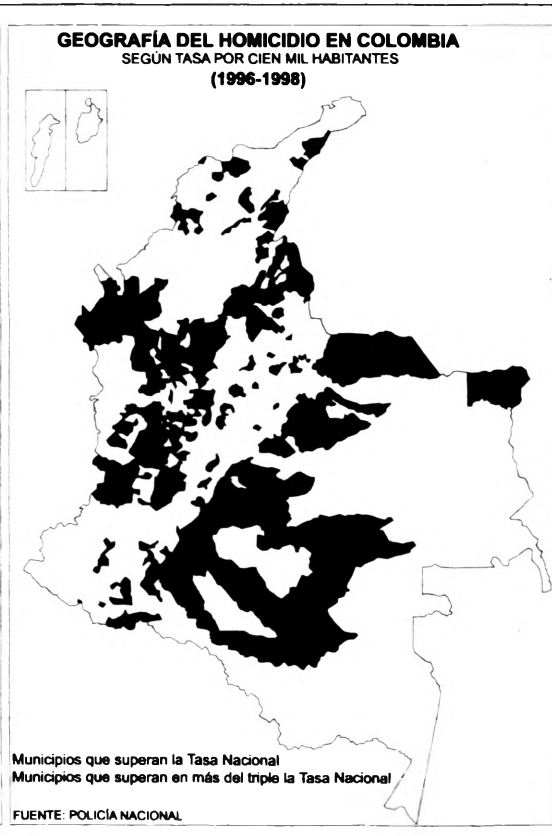


Fig. I.4: C. Echandía, 1999a: s.p.



"en manchas" que no establece una jerarquía entre los hechos registrados (figura I.1). La figura pone el énfasis en la extensión del conflicto y muestra su impresionante alcance, aunque da la sensación ambigua de un fenómeno único y homogéneo, cuando en los espacios afectados la situación es muy variable de un lugar a otro. Tal representación evoca la vaguedad semántica del nombre asignado a este periodo, que evita designar con exactitud las fuerzas presentes y, por el contrario, sugiere una responsabilidad difusa, compartida por todos los colombianos.

Cuarenta años más tarde, Alejandro Reyes publicó en un importante diario⁵, un inventario cartográfico de la violencia política actual (figura I.2). Allí se registran, por ejemplo, las acciones bélicas de las guerrillas durante más de una década, sin distinguir si ellas corresponden a enfrentamientos mortales con las tropas gubernamentales o a golpes de fuerza que no provocan más que daños materiales; o bien si ellas se traducían en una presencia pasajera de grupos insurrectos o, por el contrario, en su control permanente de una región. Colombia, en su conjunto, parecía indistintamente involucrada y, en la introducción de su informe, el sociólogo pudo justificar su trabajo cartográfico como

punto de partida para (...) tomar conciencia de que aunque la guerra no ha llegado todavía a la cotidianidad de las grandes ciudades, ya ocasionó suficiente estrago en buena parte del país rural, como para merecer el interés de los habitantes urbanos, y ese interés obre como presión a favor de la negociación de la paz⁶.

La vaguedad aquí adoptada en materia de convenciones gráficas revela cómo el autor "dramatiza" el alcance del fenómeno: quizás en la preocupación de abogar por una solución política del conflicto.

En cuanto al trabajo de Camilo Echandía⁷, con el fin de caracterizar la evolución reciente del problema, compara la distribución del conflicto armado con la relación entre los homicidios reportados y el número de habitantes (figuras I.3 y I.4). En ambos casos, el modo de representación obedecía a las reglas de los mapas "en regiones", y los señalamientos realizados permiten separar mucho mejor las zonas más afectadas. Sin embargo, el fondo del mapa municipal utilizado es engañoso, sobre el plano visual, debido a la enorme variedad del tamaño de los municipios; los más grandes – por consiguiente los más visibles – eran, a menudo, los menos poblados.

A modo de comparación, en el atlas dirigido en 1999 por Evelyn Mesclier, los autores han hecho todavía un mayor esfuerzo para poner en evidencia el peso relativo y absoluto de la violencia homicida en Colombia.

Sobre un mapa hasta entonces inédito, jerarquizado claramente por el juego de escalas diferenciadas, la mitad correspondiente a los Llanos Orientales (poco poblada) y el resto del país (donde se observa una mayor concentración de población y de actividades), los geógrafos han conservado un método de representación capaz de suministrar dos tipos de información: el número de asesinatos cometidos (por medio de círculos proporcionales colocados en el centro de los municipios registrados), y su porcentaje dentro del número total de fallecimientos (por la trama de grises). De esta manera, se demuestra claramente que los homicidios son menos frecuentes en los municipios de los Llanos Orientales, lo que no impide altas tasas en el piedemonte andino o en el departamento del Guaviare. En la mitad occidental, en cambio, si bien las principales ciudades son las más afectadas, según el número de

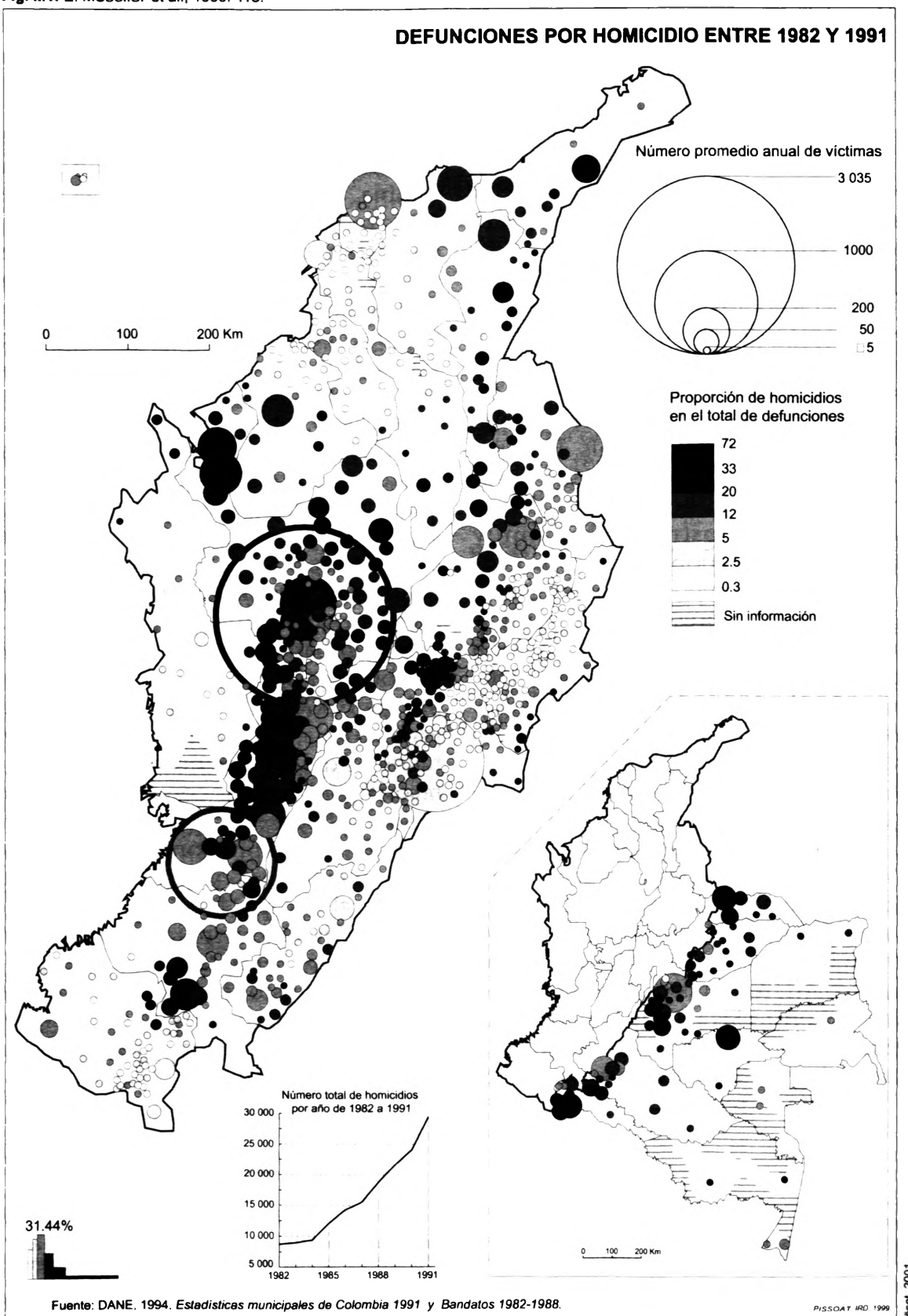
⁽⁵⁾ Reyes, Alejandro. "Contra reforma agraria de los narcos". En: *El Espectador*, marzo 10, 1996.

⁽⁶⁾ Reyes. *Ob.cit.*, p. 2.

⁽⁷⁾ Echandía, Camilo. *Geografía del conflicto armado y las manifestaciones de la violencia en Colombia*. Bogotá: Paz Pública – CEDE, Documento de trabajo No. 18, 1999.

Lámina II: Una representación de la violencia a través de los homicidios

Fig. II.1: E. Mesclier et al., 1999: 115.



hechos registrados, los porcentajes relativos pueden ser bastante débiles, como en Bogotá, por ejemplo (contrario a Medellín, que sufría en esta época el pleno azote de las acciones del narcotráfico). Se pueden, además, individualizar ciertos centros de violencia específicos, que no se resaltan con la misma claridad en los mapas de Echandía: Urabá, los enclaves auríferos de Antioquia, los de las esmeraldas en Boyacá, el Magdalena Medio, la región del Patía, etc.

Para Echandía, sin embargo, el hecho de recurrir a la cartografía responde a un acercamiento decididamente sintético, que pretende atribuir todo su peso a "los actores organizados" en la explicación de los elevados índices de homicidios que sufren ciertos sectores del país. El mapa está, por consiguiente, integrado al razonamiento, como herramienta de investigación, demostrando la "...muy significativa correspondencia en la geografía de estos fenómenos"⁸. La escogencia de las variables representadas, homicidios o hechos de armas, significa una cierta concepción de la violencia, mientras que los dos indicadores, algunas veces presentados sobre un mismo plano, no dan cuenta de los mismos procesos.

En otro registro, la noción de "violencia urbana", que preocupa tanto el espíritu de los ciudadanos como el de los poderes públicos, se apoya frecuentemente en una amalgama entre gran bandidismo, pequeña delincuencia, o simple falta de los usos elementales de la vida en sociedad, mientras que los crímenes y delitos contra las personas y los actos tales como el vandalismo no responden a las mismas lógicas. Las acciones "incivilizadas"⁹ remiten, sobre todo en

Colombia como en otros lugares, al debate sobre la inseguridad de las ciudades, lo mismo que a la criminalidad.

Más allá de la pertinencia o de la dimensión implícita del indicador cartográfico, queda claro que se plantea la cuestión primordial de la definición misma de la violencia. El economista Fernando Gaitán¹⁰, señala cómo, en Colombia, las múltiples acepciones del término pueden inducir a los expertos a tener en cuenta los diversos eventos que describen realidades muy diferentes. El investigador enumera algunos parámetros que frecuentemente acompañan el concepto de violencia (ausencia de libertades, deficiencia de los servicios públicos, desempleo, promiscuidad...), para denunciar las aproximaciones que rodean a este concepto: "...es comprensible que considerar tantas condiciones de la vida social como actos de violencia hace que, en últimas, no contemos con ninguna definición y que, fácilmente, estemos simplemente divagando".

Sin embargo, una cosa es segura: Colombia ha atravesado la segunda mitad del siglo XX en un clima de violencia generalizada, pues las múltiples manifestaciones del fenómeno han actuado en resonancia las unas con las otras¹¹. Esta característica explica la dificultad de establecer una definición precisa para un tema que no lo es, y que, además, cambia con el tiempo. El problema de la definición de la violencia no puede, por consiguiente, ser tratado más que en una perspectiva histórica, donde las circunstancias, las interpretaciones y las representaciones de los procesos se superponen fuertemente entre sí.

⁽⁸⁾ *Ídem.*, s.p.

⁽⁹⁾ Este término es utilizado, sobre todo, en los países desarrollados (EU, Europa), donde la "violencia urbana" se ha convertido en un tema electoral el cual, según Loïc Wacquant, oculta la progresiva puesta en escena del tratamiento de seguridad de los problemas sociales. De esta manera, se autoriza la difusión de la ideología de disminución del Estado social y del hundimiento del Estado penal. Véase: Wacquant, Loïc. *Les Prisons de la Misère*. París: Raisons d'agir, 1999.

⁽¹⁰⁾ Gaitán, Fernando. "El método dialéctico como alternativa para estudiar la violencia en Colombia". En: Camacho Álvaro et. al. *Nuevas visiones sobre la violencia en Colombia*. Bogotá: IEPRI-FESCOL. 1997, pp. 86-87.

⁽¹¹⁾ Pécaut, Daniel. "Réflexions sur la Violence en Colombie". En: Françoise Héritier (Dir.). *De la violence*. París: Odile Jacob, 1996, p. 226.

Las representaciones, así como las interpretaciones, se modifican a medida que la violencia se desarrolla y cambia de naturaleza.

Escrito inmediatamente después de la Violencia, en el seno de la recién creada Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, el libro de Germán Guzmán, Orlando Fals y Eduardo Umaña abordaba el problema a partir de la teoría del conflicto social. De acuerdo con esta lógica, la Violencia era un proceso revelador de la disfunción de "las instituciones fundamentales" de la nación, de la desintegración y de la reorganización de las estructuras mismas de la sociedad. El diagnóstico establecido era, por cierto, muy descriptivo, pero no se constituyó tampoco en la única referencia sobre la cual se basaron los estudios del fenómeno hasta mediados de los años setenta¹². En la línea de trabajo de Guzmán, Fals y Umaña se inscribían las publicaciones de politólogos norteamericanos subrayando, desde entonces, un punto que pudo aislarse antes, colocando al Estado en el centro del análisis¹³. El ejemplo más marcado en este campo es la obra de Paul Oquist¹⁴, de la cual la "teoría integral" sobre el derrumbe parcial del Estado como elemento explicativo de la Violencia ha suscitado controversia, aunque también ha contribuido a orientar los debates en este sentido.

Durante el transcurso de los años ochenta, Colombia sufrió una nueva fase de recrudecimiento de la violencia, que todavía continua hoy en día, y cuya intensidad solamente es comparable con la sufrida durante la época de la Violencia, como lo indicaba, desde 1988, la curva trazada por Losada y Vélez¹⁵.

Todos los observadores lo han señalado: este recrudecimiento está acompañado de una renovación relativa de los modelos que habían estructurado la violencia hasta entonces (enfrentamientos bipartidistas en los años cincuenta, surgimiento de las guerrillas en los años sesenta y setenta), con la aparición de nuevos protagonistas (narcotraficantes, grupos de autodefensa y escuadrones paramilitares, pandillas de delincuentes en las ciudades...). No obstante, esta "nueva violencia", como se la denomina a veces, ha comenzado por un amplio restablecimiento de la lucha guerrillera. También, en el primer plano de los temas abordados por los investigadores a comienzos de los años ochenta, se vuelven a encontrar las preocupaciones que parecen resurgir del pasado, como los movimientos revolucionarios, o contrarrevolucionarios, la reforma agraria, la apertura democrática, la amnistía o la paz¹⁶. El estudio de la Violencia goza, por lo demás, durante este periodo, de un renovado interés por parte de una nueva generación de intelectuales colombianos, por medio de estudios regionales minuciosos, donde se vinculan la violencia con los conflictos agrarios o territoriales. En razón del arraigo disciplinario de estos análisis (sociología, ciencias políticas, historia...), pero igualmente por su orientación –se plantea un interrogante acerca de los fundamentos políticos o institucionales de los procesos–, la cartografía de la Violencia no se consideraba como un recurso necesario. A lo mejor, los autores tenían un campo de estudio bien delimitado en el espacio, matizando a veces sus textos con mapas de localización, que en general eran puramente ilustrativos.

¹² Sánchez, Gonzalo. "Los estudios sobre la Violencia: balance y perspectivas". En: Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (compiladores). *Pasado y presente de la Violencia en Colombia*. Bogotá: CEREC, 1986, p. 18.

¹³ Ortiz, Carlos Miguel. "Los estudios sobre la violencia en las tres últimas décadas". En: *Boletín socioeconómico*, Nos. 24-25, agosto-diciembre, 1992, pp. 48-49.

¹⁴ Oquist, Paul. *Violencia, conflicto y política en Colombia*. Bogotá: Banco Popular, 1978.

¹⁵ Lozada, Rodrigo y Vélez, Eduardo. *Muertes violentas en Colombia entre 1976 y 1986*. Bogotá: Instituto SER de Investigación, 1988, p. 37.

¹⁶ Sánchez. *Ob.cit.*, p. 21.

Progresivamente, a medida que la violencia aumentaba, los investigadores colombianos se han reconciliado con la realidad más contemporánea de este fenómeno. El objeto de su cuestionamiento se ha visto modificado poco a poco, puesto que ha pasado de una situación de guerra civil no declarada, donde se enfrentaban esencialmente dos partidos políticos en un país predominantemente rural, a una lucha entre el Estado central y numerosos contrapoderes insurreccionales que se imponían localmente en un país en adelante urbano. El legado de las investigaciones llevadas a cabo sobre la Violencia examinaba, por tanto, la percepción de la "nueva violencia", en la medida en que los numerosos estudios han continuado en su afán de aislar una serie de factores o de causalidades simples como desencadenantes o motores de los conflictos. La violencia y el cierre del sistema político, que estimulaba la adhesión a los movimientos rebeldes, la violencia y la pobreza, considerada como el "caldo de cultivo" de la criminalidad, eran las principales relaciones dialécticas tenidas en cuenta para identificar las hipotéticas "causas objetivas" de la violencia. En razón de estas carencias y de estas disfuncionalidades, con frecuencia el Estado era considerado el principal responsable, junto con las organizaciones armadas.

En cambio, el fin de los años ochenta se constituyó en un vuelco. Mientras que los enfrentamientos calificados de "políticos" entre el Estado, los diferentes grupos guerrilleros y las organizaciones de narcotraficantes proliferaban—así como las interferencias entre los actores del conflicto eran cada vez más flagrantes, y que la inseguridad de las grandes ciudades aparecía como un nuevo apoyo al despliegue de la violencia—, el estudio y la cartografía del tema se transformaron radicalmente. En 1987, a solicitud del gobierno, la Comisión de estudios sobre la violencia (compuesta principalmente por miembros de la Universidad Nacional de Colombia y presidida por Gonzalo Sánchez), publicó un vasto

estudio titulado "Colombia: violencia y democracia". Este informe, objeto de amplia difusión en los medios, ha confirmado el carácter proteiforme de la violencia, elaborando una tipología detallada de sus múltiples manifestaciones. La investigación atravesó una etapa fundamental. La cuestión debía, en adelante, ser descifrada de acuerdo con una lectura plural, basada en la diferenciación de las violencias, en función de sus dinámicas, de sus responsables y de sus modalidades de expresión. Señalemos, de paso, que esta obra mayor respondía a una exigencia institucional, como la de Guzmán, Fals y Umaña, ya escrita en el marco de una comisión de investigación ordenada por el gobierno (la Comisión investigadora de las causas actuales de la Violencia), compuesta por dos sacerdotes, dos militares y dos representantes de los partidos políticos tradicionales; una composición que atestiguaba los cambios de contexto y de cultura políticos entre las dos fechas.

Cuando se precisaba la comprensión del fenómeno, se publicaron numerosos mapas que demostraban la utilidad de reubicar las violencias en sus contextos locales para poder captar mejor su singularidad. La cartografía intervino, por primera vez, en aras de la demostración. En 1988, Rodrigo Losada y Eduardo Vélez se apoyaron en una representación regionalizada de la "nueva violencia" a escala nacional (figura III.1), antes de proponer su propia explicación de las elevadas tasas de homicidios en el país. Es sólo después de que los autores han identificado las zonas consideradas como "bastante" o "extremadamente" violentas, que éstos han enumerado los parámetros explicativos (de los cuales ninguno es nuevo en sí) que se conjugaban: presencia de guerrillas, de grupos de autodefensa, de organizaciones de narcotraficantes, de matones a sueldo, de cultivos ilícitos, de minas de esmeraldas, de frentes de colonización, de conflictos sindicales, de contrabando, etc.

Conscientes de que los fenómenos de violencia "...no están asociados a una

Lámina III: La fragmentación espacial de la violencia

Fig. III.1: R. Losada, E. Vélez, 1988: 48.

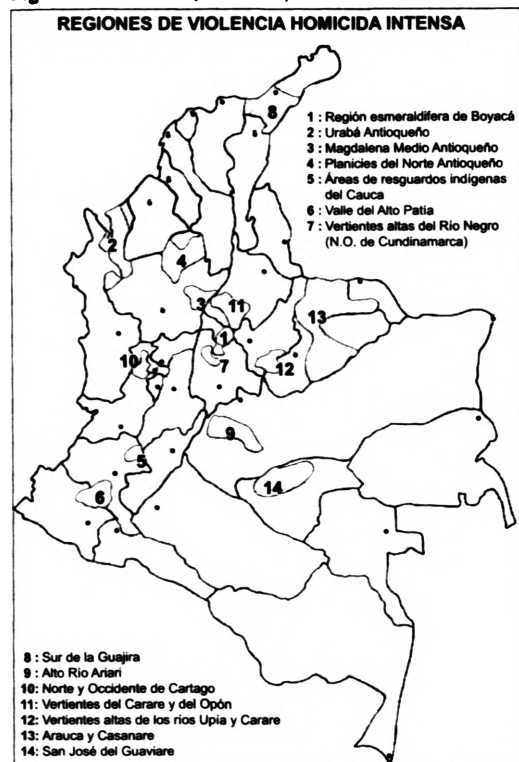


Fig. III.2: Medicina Legal, 2000: 37.

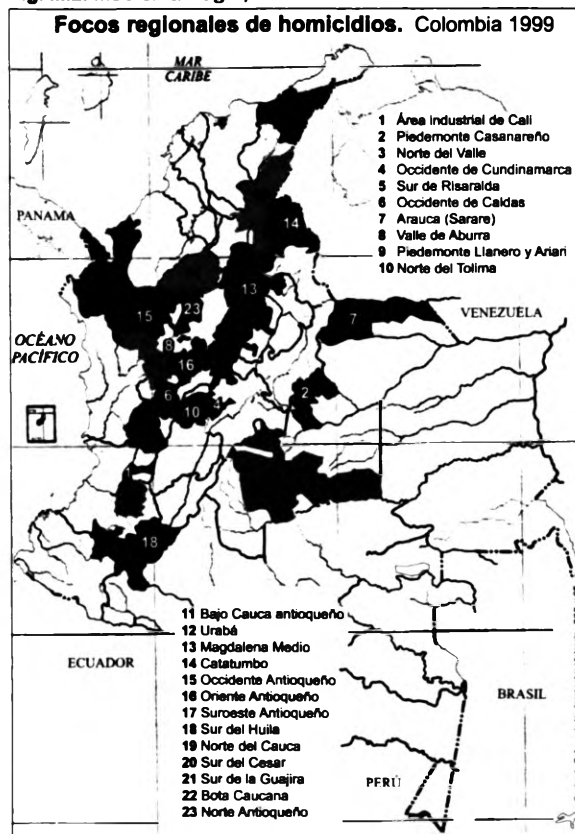


Fig. III.3: A. Reyes, 1988: 6-27.

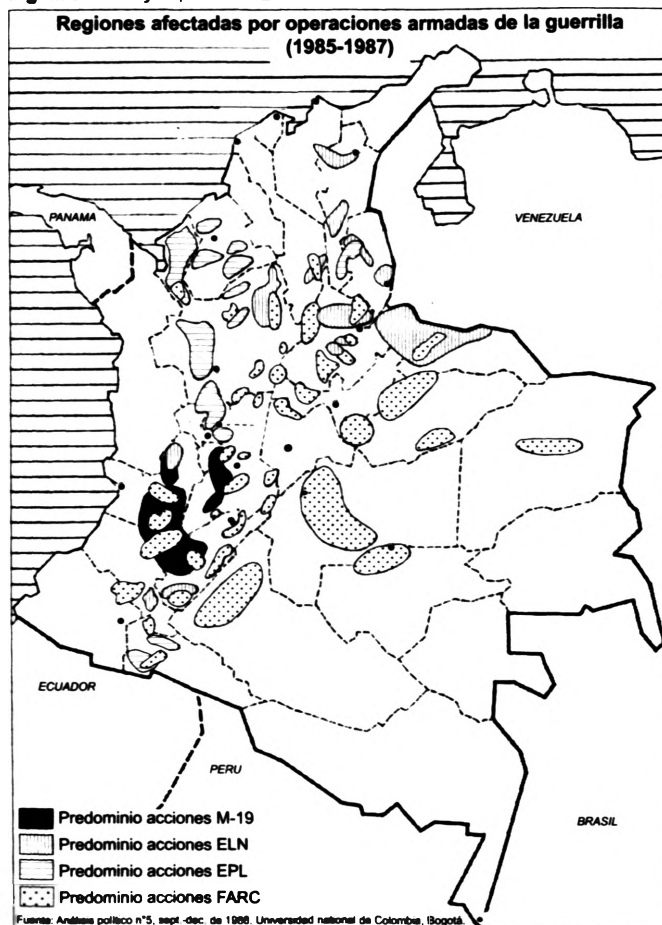
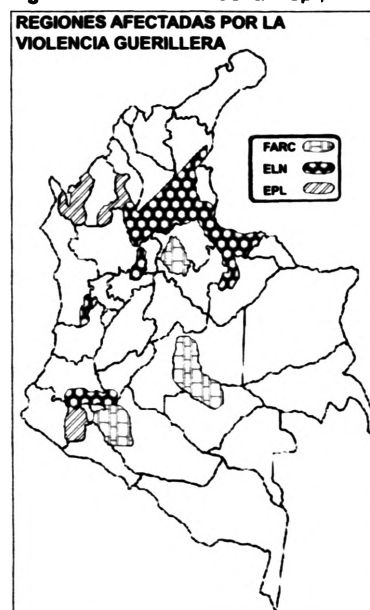


Fig. III.4: Presidencia de la Rep., 1990: 18.



identidad administrativamente definida"¹⁷, este acercamiento zonal ha sido retomado en la actualidad por los especialistas de Medicina Legal (figura III.2), quienes prefieren mantener este tipo de representación, a aquellas por departamento que publicaban antes. La comparación de los dos mapas demuestra, por lo demás, que los "focos" señalados en 1988 continuaban activos en el año 2000. Algunos de ellos se han extendido, otros han surgido después. Aun en 1988, en el marco de un programa denominado "Geografía de la violencia contemporánea en Colombia", Alejandro Reyes igualmente utilizaba los mapas para cimentar su argumentación acerca de la implantación rural muy localizada de los frentes guerrilleros (figura III.3). El trabajo cartográfico desarrollado por el sociólogo era, por lo demás, muchísimo más cuidadoso que el de los organismos oficiales, cuyos mapas continuaron siendo muy esquemáticos y, a veces, incompletos (figura III.4).

La descripción sistemática de las áreas de guerrillas ha permitido al sociólogo retomar las tesis que asocian la distribución de los grupos insurrectos con las luchas sociales ligadas a los conflictos agrarios. En cuanto a Losada y Vélez, el trabajo similar que emprendieron les ha llevado a poner en duda la teoría que apuntaba a las carencias del Estado y a la pobreza como elementos que favorecían la perpetración del homicidio. Estos investigadores han evaluado principalmente, comuna por comuna, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, la correlación existente entre el número de homicidios cometidos y los datos socioeconómicos que expresaban un encajonamiento de las poblaciones por parte

del Estado. Una vez superada la dificultad de escogencia de las variables que se iban a comparar, el método permitió validar –o, por el contrario, anular–, las interpretaciones ya desarrolladas por otros investigadores. Losada y Vélez se interrogaban, por lo demás, sobre el tema en la conclusión de su obra: tales verificaciones quedaban por hacer para la inmensa mayoría de factores explicativos fácilmente admitidos hasta entonces (en particular "la injusta distribución de la tierra" o el postulado que pone a la "democracia restringida" como causa principal de la violencia política).

Al comenzar a interesarse de manera detallada en las características de los espacios afectados por la violencia, un número de investigadores y de encargados del proceso de toma de decisiones¹⁸ continuaron aferrados a las hipótesis "macrosociales" formuladas durante los años anteriores. El desarrollo del "Plan Nacional de Rehabilitación", puesto en marcha por el presidente Barco (1986-1990), explicaba esta continuidad, con la aplicación y la ampliación de las medidas previstas por el gobierno anterior en las zonas periféricas. De la misma manera que invertir en las regiones desfavorecidas apuntaba a establecer un diálogo directo con las comunidades azotadas por la miseria, y no solamente con las guerrillas¹⁹, el filósofo José Jairo González deploraba la ausencia de una "verdadera conciencia geográfica" de las respuestas que se podrían dar²⁰.

La producción cartográfica de este periodo coyuntural permaneció marcada por la preocupación de identificar, dentro de una lógica cercana a las "causas objetivas" mencionadas antes, lo que, frente a desequilibrios inherentes a la

⁽¹⁷⁾ Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. *Forensis 1999: datos para la vida*. Bogotá: Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 2000.

⁽¹⁸⁾ Bajo la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990), varios catedráticos, "a la cabeza en la gestión de los programas políticos más sensibles" integraron "un equipo reducido y discreto de consejeros (...) que no hacían parte del mundo de las redes políticas". Véase Pécaut, Daniel. "La Colombie dans la Tempête". En: *Problèmes d'Amérique Latine*, No. 98, diciembre, 1990, pp. 5-6.

⁽¹⁹⁾ Pizarro, Eduardo. "Barco y las perspectivas de la paz". En: *Revista Foro* No. 7, octubre, 1988, p. 27.

⁽²⁰⁾ González, José Jairo. "Geopolítica de la violencia". *Análisis* No. 2, mayo, 1989, p. 43.

organización del espacio colombiano permitía explicar el desigual desarrollo de la violencia. A partir del "mapa municipal de la pobreza", establecido por el DANE en 1988, Fresneda y Sarmiento publicaron en 1991 una clasificación de los municipios colombianos según sus "estructuras de producción" y su "grado de desarrollo" (de hecho, una tipología fundamentada esencialmente en las estructuras agrarias), tratando de establecer un vínculo entre las características espaciales de los municipios y la presencia de los actores armados. Esta tipología, cartografiada algunos años más tarde²¹, ha sido de inmediato considerada por los especialistas de la violencia como una herramienta de importancia capital y retomada en un gran número de estudios.

Después de Barco, el Presidente Gaviria (1990-1994), elaboró en 1991 una estrategia que, como lo señala José Jairo González, "considera[ba] que la erradicación de la violencia exig[ía] tener en cuenta las particularidades regionales"²². Al año siguiente, el gobierno creó otra comisión: la "Comisión de superación de la violencia" (presidida por un especialista de la Universidad Nacional, Alejandro Reyes, y compuesta, además de universitarios, por miembros de la Comisión Andina de Juristas y del CINEP). Esta comisión publicó un informe titulado "Pacificar la Paz" que puede ser considerado como la segunda versión de "Colombia: violencia y democracia". Allí, la visión del problema evolucionó y el acento se puso en su dimensión espacial, trazando "una especie de Atlas de la violencia. (...) Se pasó así de una tipología de violencias, a una tipología de regiones"²³. La

obra concluía que existía la necesidad de reforzar la participación ciudadana, e insistía en el papel de las organizaciones populares, cívicas, religiosas, étnicas y económicas en la elaboración de un proyecto de paz. La época era, de hecho, propicia a esta confrontación de ideas, ya que globalmente se abría un amplio debate sobre las cuestiones de seguridad, al que toda la sociedad civil en su conjunto estaba invitada a participar. Por un lado, los políticos, especialmente aquellos que formaban parte de la Asamblea Constituyente recientemente elegida, que representaba un instrumento de diálogo con las poblaciones antes menos asociadas a los procesos democráticos y de pacificación, gracias a las negociaciones emprendidas con los narcotraficantes y la guerrilla²⁴. En segundo lugar, los medios, que más allá de su influencia sobre la percepción de los acontecimientos ligados a la violencia, estaban encargados, en nombre de la transparencia anunciada por el poder, de dar a conocer a la opinión los documentos que exponían las directrices de las decisiones estatales en este campo²⁵. Por último, los investigadores, invitados por el gobierno central a proponer una mejor definición de los conceptos utilizados en estos nuevos espacios de discusión²⁶.

Gracias a este estímulo institucional y a una demanda social creciente, los estudios se han multiplicado y las interpretaciones se han renovado. El análisis se ha visto enriquecido por la entrada en escena de investigadores provenientes de otras disciplinas, especialmente de economistas, hasta entonces los menos seducidos por el tema. Se comen-

(21) Sarmiento Libardo. "Categorías municipales en la historia de Colombia". En: Sarmiento Libardo (director). *Municipios y regiones de Colombia*. Bogotá: Fundación Social, 1998, p. 75.

(22) González, José Jairo. "Región y conflicto". *Análisis*, No. 6, febrero, 1992, p. 33.

(23) Sánchez, Gonzalo. "Los intelectuales y la violencia". En: *Análisis Político* No. 19, mayo-agosto, 1993, p. 40.

(24) Blanquer, Jean-Michel. "La Colombie: la Nouvelle Constitution". En: *Problèmes d'Amérique Latine*, No. 7, diciembre, 1992, p. 86.

(25) Pizarro, Eduardo. "Les forces armées dans un contexte d'insurrection chronique ou le statut des forces armées dans la société colombienne". En: Blanquer, Jean-Michel y Gros, Christian (director). *La Colombie à l'aube du troisième millénaire*. Paris: Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, 1996, p. 79.

(26) Montenegro, Armando. "Prólogo". En: Deas, Malcolm y Gaitán, Fernando. *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*. Bogotá: FONADE-DNP, 1995, pp. XI.

zaron a utilizar más frecuentemente las estadísticas, cada vez más exactas, emanadas del Estado, de diferentes ONG (CINEP, Comisión Andina de Juristas, etc.), o de investigaciones llevadas a cabo por los universitarios. Gracias a estos avances, el estudio de las violencias busca, ahora, aproximarse a las especificidades regionales y locales con un mayor rigor en cuanto a la escogencia de criterios de información, y conforme a los ángulos metodológicos y disciplinarios cada vez más variados, que permiten hoy en día a los investigadores reevaluar metódicamente ciertas ideas propuestas por los "violentólogos" de la generación precedente. El trabajo de Fernando Gaitán es una demostración elocuente. El investigador demuestra, por ejemplo, partiendo de la observación atenta de la evolución diacrónica de la tasa de homicidios por habitante, que el país ha atravesado suficientes periodos de calma relativa después de su llegada a la independencia, para refutar la noción de "cultura de la violencia", a veces evocada a propósito de la supuesta "continuidad histórica" de la violencia colombiana después del siglo XIX. Así mismo, Echandía, a partir de mapas continuamente mejorados, insiste en el débil valor explicativo de la pobreza en la intensidad de la violencia sufrida en ciertas partes del país²⁷.

Sin embargo, si la hipótesis de las "causas objetivas" de la violencia se rechaza cada vez más, es también porque los autores han refinado el concepto de "pobreza", el cual se sustituye por aquel más sutil "de inequidad", que hace referencia no solamente a las diferencias en ingresos entre los habitantes, sino también a la

noción de desigualdad en la distribución de la riqueza. Un trabajo econométrico de Alfredo Sarmiento²⁸, que merecía ser cartografiado en tanto que los datos utilizados son precisos, demuestra que la desigualdad es el principal factor que permite explicar el aumento de la tasa de homicidios durante los años noventa. Del mismo modo, el papel del Estado continúa siendo un punto discutido por los investigadores, que denuncian, no sólo globalmente estas debilidades, sino más precisamente los vacíos del sistema judicial. Más aún que Gaitán, el economista Mauricio Rubio, tanto en sus estudios nacionales como en los realizados sobre las ciudades más grandes, pone de presente las disfuncionalidades de la justicia colombiana, que condujeron a una "desinformación" de la opinión pública²⁹, en las zonas de conflicto, donde las contribuciones forzosas han sido mal registradas, y cuya propensión a limitar sus investigaciones a las contribuciones forzosas menos graves³⁰ refuerzan la violencia, tanto, que "el sistema penal de justicia puede no ser independiente de quienes debería combatir"³¹.

Durante la segunda mitad de los años noventa, bases de datos que incorporan el espacio y la cartomática, han prestado una contribución valiosa. Se han convertido en herramientas de análisis que aportan los resultados en los cuales se basan numerosas interpretaciones, o que son retomados por los expertos para afinar sus problemáticas. Hoy en día, por consiguiente, es muy común encontrar representaciones cartográficas en las publicaciones sobre la violencia en Colombia, cualquiera que sea el tipo de

(27) Echandía, Camilo. *El conflicto armado y las manifestaciones de la violencia en las regiones de Colombia*. Bogotá: Presidencia de la República, 1999.

(28) Sarmiento, Alfredo. "Violencia y equidad". En: Camacho, Álvaro y Leal, Francisco. *Armar la paz es desarmar la guerra*. Bogotá: IEPRI-FESCOL-CEREC, 1999.

(29) Rubio, Mauricio. *Rebeldes y criminales: una crítica a la tradicional distinción entre el delito político y el delito común*. Bogotá: CEDE, Universidad de los Andes, Documento CEDE No. 98-06, 1998, p.29.

(30) Rubio, Mauricio, *Homicidios, justicia, mafias y capital social. Otro ensayo sobre la violencia colombiana*. Bogotá: CEDE, Universidad de los Andes, Documento CEDE No. 96-06, 1996; "La justicia en una sociedad violenta". En: Deas Malcolm y Llorente María Victoria (compiladores). *Reconocer la guerra para construir la paz*. Bogotá: CEREC - Universidad de los Andes - Norma, 1998.

(31) Rubio, Mauricio. "Criminalidad urbana en Colombia". En: Deas, Malcolm y Llorente, María Victoria (compiladores). *Reconocer la guerra para construir la paz*. Bogotá: CEREC-Universidad de los Andes-Norma, 1998, p. 281.

violencia estudiado. La utilidad de una cartografía detallada es, por lo demás, reconocida al más alto nivel, algunas veces con ingenuidad en cuanto a su eficacia, cuando por ejemplo el gobierno anunció en octubre de 2000 la puesta en servicio del Sistema de Información Geográfica (SIG) sobre las masacres, con el objetivo de intervenir más rápidamente, y aun de “prevenir” este flagelo³².

LOS MAPAS DE VIOLENCIAS

Los mapas que se presentarán a continuación comprueban el abanico de aproximaciones a la violencia por parte de los investigadores colombianos. Aunque muy diversificados, la mayor parte permanecen marcados por una lectura que privilegia las dimensiones “macro” y política de la cuestión, en detrimento de una visión más social, centrada en los individuos y en su recorrido personal. Conforme a esta lógica, las fuerzas insurreccionales (guerrillas y paramilitares) han sido las primeras en ser objeto de un “seguimiento cartográfico”. Por falta de datos fiables, y sin duda también por razones de seguridad, los mapas concernientes a las mafias de la droga – un tema examinado más tarde por los investigadores – han sido menos frecuentes y menos detallados. Por el contrario, los análisis que tratan de la violencia a una escala regional más detallada han permitido desenmarañar la madeja particularmente compleja del fenómeno en un contexto territorial restringido, mostrando que las estrategias de los actores, fácilmente identificadas a escala nacional, llegaron a ser localmente menos legibles (los casos del Tolima, de Urabá, y del sur de Bolívar se han recogido aquí). Así mismo, a una escala todavía más precisa, la “violencia urbana” (un concepto que presenta las mismas ambigüedades que las de la “violencia política”), enreda un poco más la frontera entre una violencia sobre todo institucional, y otra

violencia, todavía más hecha de acciones que riñen con el comportamiento cívico. Esta forma de violencia es hoy en día objeto de una producción cartográfica que contribuye a renovar en parte el estudio general de las violencias en el país. La violencia en las ciudades, por largo tiempo descuidada aunque más “cerca” de la sociedad colombiana contemporánea, nos recuerda que, al igual que el problema de los “refugiados”, la primera víctima de la violencia es la población civil en su conjunto.

Revolución, contrarrevolución: guerrillas vs. grupos paramilitares

Como se ha demostrado a lo largo de este escrito, la orientación asumida por los especialistas les ha llevado a privilegiar a los actores “políticos” de la violencia. Esta es la razón por la que las guerrillas, habida cuenta de su profunda y duradera injerencia en la historia del país, hayan sido objeto de muchos estudios.

De todos los movimientos guerrilleros colombianos, las FARC constituyen el grupo más importante, por su antigüedad, el número de sus efectivos o la cantidad de comunidades que sufren su asedio. Aunque constituidas oficialmente en 1966, son los remanentes de los grupos de autodefensa campesina formados durante la Violencia, especialmente en el Tolima. Desde entonces no han cesado de crecer, tanto numérica como territorialmente, y así lo atestiguan los mapas “por áreas” de María Vélez (figuras IV.1 y IV.2), en los cuales la falta de información sobre el impacto real de esta presencia de la guerrilla se compensa con un comentario preciso.

Esta evolución fue, en primer lugar, analizada y cartografiada por Alejandro Reyes, quien fue el primero en diferenciar los espacios de presencia de la guerrilla: zonas de refugios, zonas de producción de recursos, zonas de enfrentamientos armados. Tal aporte hizo, por lo demás, decir a

⁽³²⁾ *El Tiempo*, septiembre 6, 2000.

Lámina IV: La presencia de los grupos armados

Fig. VI.1: M. Vélez, 2000: 39.

Fig. VI.2: M. Vélez, 2000: 41.

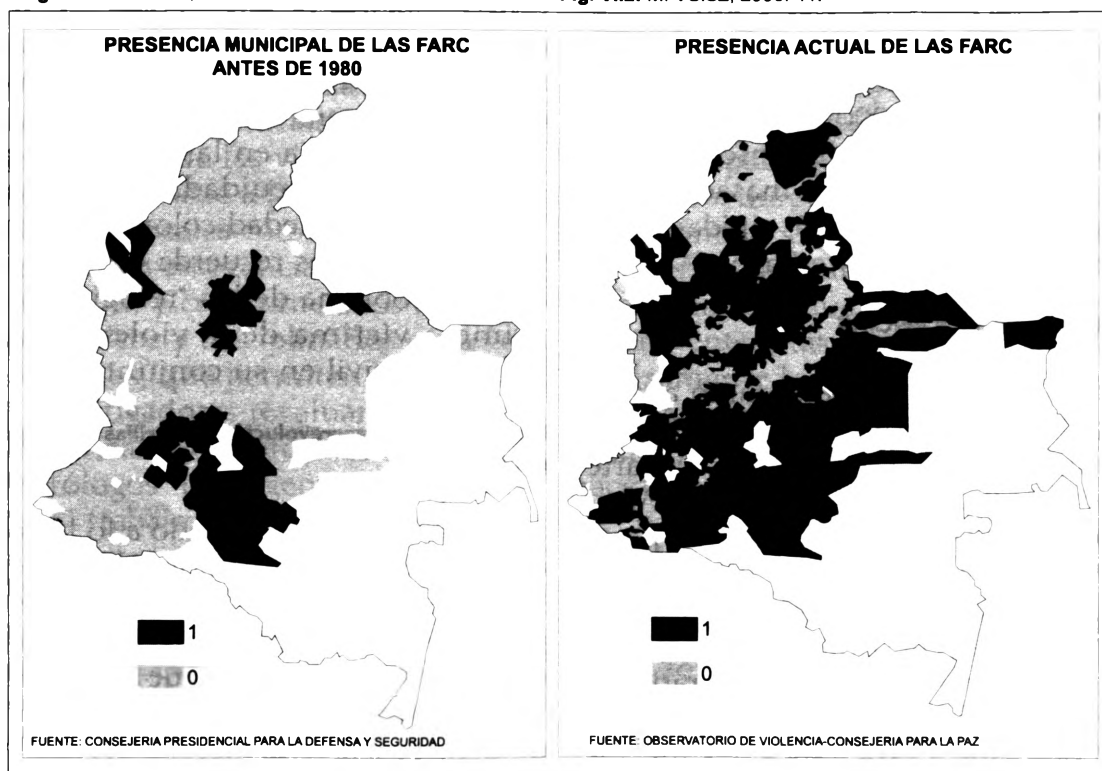
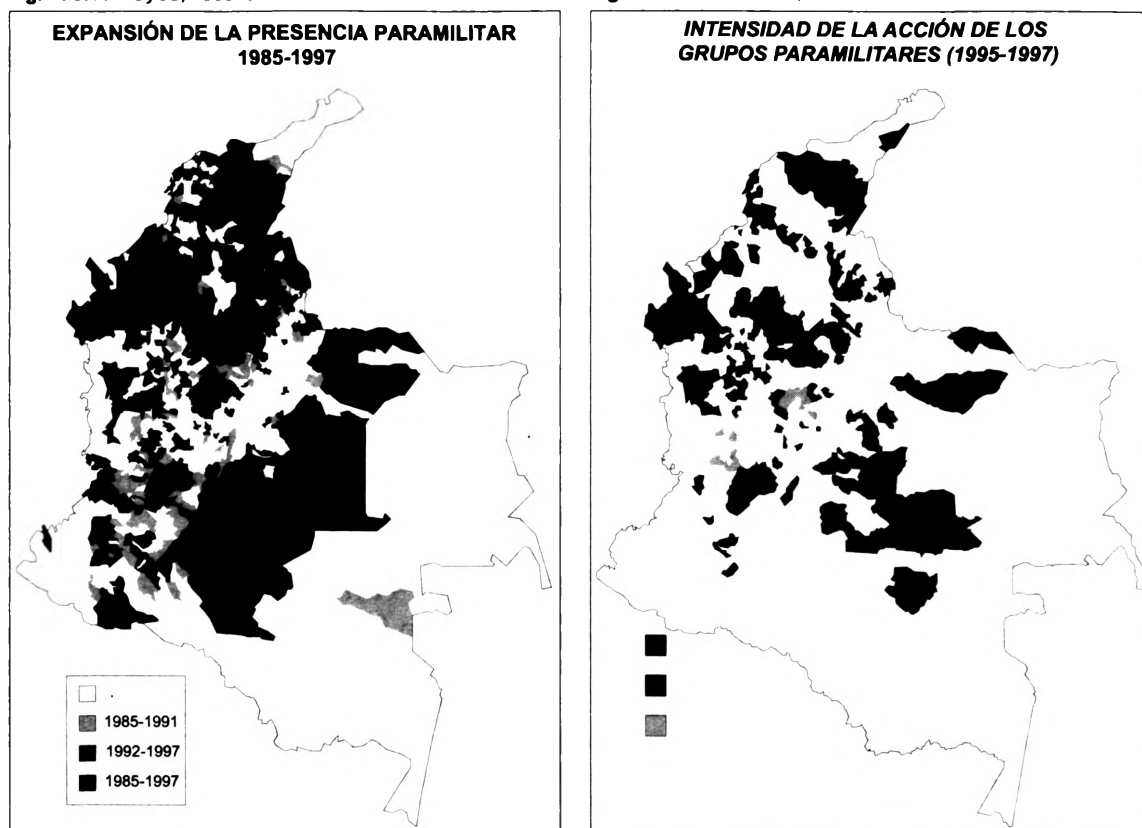


Fig. VI.3: A. Reyes, 1999: 8.

Fig. VI.1: C. Echandía, 1999b: 75.



Carlos Miguel Ortiz³³: "Qué interesante sería contar también con mapas que nos ilustran sobre la expansión de los grupos paramilitares y de autodefensa, y su relación o no, según regiones, con la expansión de la inversión en tierras por parte de los capitales del narcotráfico".

Durante el transcurso de los años siguientes, Reyes –seguido por un buen número de investigadores–, se ha dedicado a esta tarea, y los paramilitares (que actúan abiertamente desde mediados de los años ochenta, pero cuyo origen legal se remonta a 1965), se convierten en otro objeto de estudio en su contexto de espacio geográfico por parte de los expertos. Allí es posible volver a encontrar tendencias análogas a aquellas observadas para las guerrillas. Mientras que la cartografía de Reyes ha señalado la envergadura nacional del problema (figura IV.3), la de Echandía se aplica más bien a analizar su intensidad, según el número de acciones perpetradas (figura IV.4). De esta manera, él ha podido sacar a la luz la estrategia propiamente territorial de los paramilitares, quienes se han arrogado la doble misión de contener la expansión de la guerrilla y de penetrar en las zonas donde aquella detentaba sus fuentes de financiación más estables. Las similitudes en la distribución espacial de estas dos fuerzas armadas refuerzan el análisis actualmente avanzado, de una presencia paramilitar en reacción a la de las organizaciones guerrilleras. Según Echandía, sin embargo, en vez de terminar con la situación de terror impuesta por ellos mismos, la acción de los paramilitares contribuye, por el contrario, a alimentarla, ya que estos últimos parecían, con el tiempo, organizarse de manera autónoma, y ya no se plegaban a las directivas de sus primeros dirigentes o financiadores, en el primer rango de los cuales figuran los narcotraficantes.

La llegada del narcotráfico

El tráfico de estupefacientes se ha convertido, a su vez, en un factor de violencia, que no ha fracasado en su intento de alterar profundamente el funcionamiento de la sociedad colombiana, al provocar la aparición de nuevos grupos sociales heterogéneos pero influyentes –las mafias de la droga y sus nebulosas–, y al brindar una fuente providencial de financiación a los movimientos insurreccionales.

Hasta entonces muy discretos y tolerados bajo la denominación de "clase emergente"³⁴, los narcotraficantes irrumpieron implacablemente en la escena política a partir de 1983-1984, ejerciendo presiones particularmente brutales en contra del poder en general y de sus oponentes en particular. En 1989-1990, el denominado "cartel de Medellín" se lanzó a una "guerra total" contra el Estado, para obligar al gobierno a derogar un tratado de extradición firmado con Estados Unidos. El mapa propuesto por el atlas dirigido por Mesclier así lo demuestra (figura V.1): la violencia se concentró, entonces, en las grandes ciudades, principalmente Medellín (sede del cartel) y Bogotá (sede del poder central). Fomentada por Pablo Escobar, esta campaña de terror inédito para el país se enfocaba esta vez sin distinción en la población civil, con los atentados ciegos que provocaron centenares de víctimas. La figura V.5, cuyo tratamiento exhaustivo del tema hace más difícil la lectura, muestra con menor claridad (excepto por el valle del Magdalena Medio) cómo al mismo tiempo, los capos de la mafia, a la cabeza de las bandas paramilitares, prosiguieron su "guerra sucia" contra la guerrilla y contra todas las personas sospechosas de ser cercanas a ella, como los sindicalistas o los militantes de la Unión Patriótica.

³³) Ortiz. *Ob.cit.*, p. 61.

³⁴) Camacho, Álvaro. "Notas apresuradas para discutir algunas relaciones entre narcotráfico y cultura en Colombia". En: Jimeno, Myriam. *Conflicto social y violencia. Notas para una discusión*. Bogotá, IFEA-Sociedad Antropológica de Colombia. 1993, p.49.

Lámina V: El narcotráfico agrava el contexto de violencia

Fig. V.1: E. Mesclier et al., 1999: 117.

Evolución de los homicidios en Colombia de 1988 a 1990

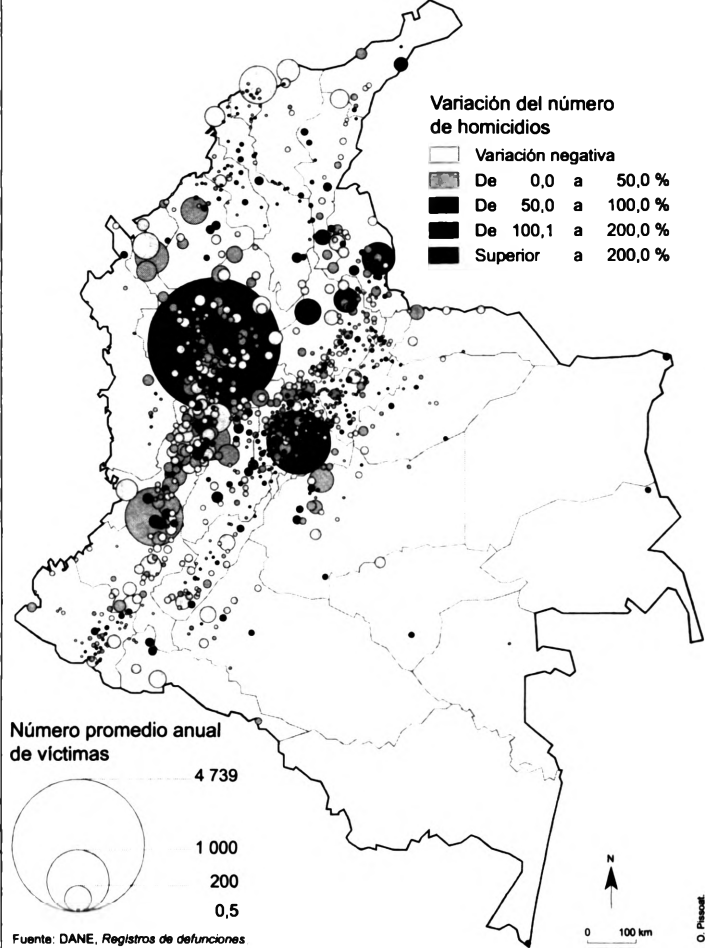


Fig. V.2: C. Echandía, 1999: 68.

MUNICIPIOS CON PRESENCIA PARAMILITAR Y COMPRA DE TIERRAS POR NARCOTRAFICANTES

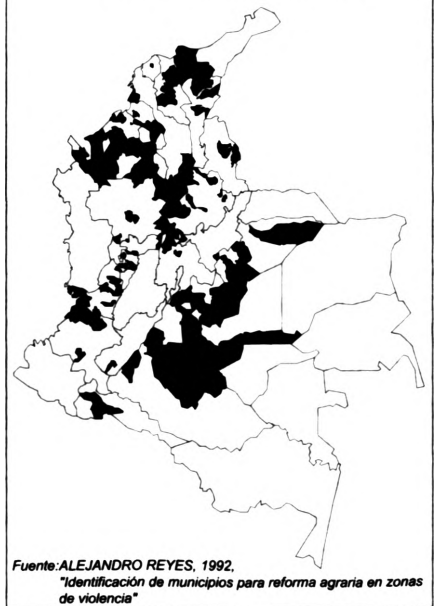


Fig. V.3: Observatorio Geopolítico de las Drogas, 1996: 93.

Tierras adquiridas por los miembros del cartel de Medellín



Contando igualmente con el apoyo de los grandes terratenientes y de ciertos sectores de la policía y del ejército, la eclosión y la multiplicación de las organizaciones paramilitares es, de hecho, indisociable del desarrollo de las mafias de la droga. El mapa elaborado por Camilo Echandía, a partir de los datos recolectados por Alejandro Reyes, se dirige por completo en este sentido (figura V.2). Este último, por lo demás, muchas veces ha afirmado: la correlación es manifiesta entre el aumento del número de grupos de extrema derecha y la extensión de los dominios adquiridos por los narcotraficantes, que orquestan a nivel nacional una “contrarreforma agraria”⁵⁵, cuyas consecuencias negativas sobre el sector agrícola colombiano son, además, múltiples (concentración de la propiedad territorial, sobrevalorización de las tierras, refuerzo de la cría de ganado extensiva en las mejores tierras).

Los miembros del cartel de Medellín parecen haber desarrollado también el proyecto de abrir un corredor más o menos continuo de propiedades que van desde las zonas de producción de coca (Llanos Orientales, selva amazónica), hasta los sitios de exportación de la cocaína, localizados en la costa del Caribe (golfo de Urabá, sectores de Córdoba). Este proyecto, del que ya ciertos investigadores colombianos abrigaban fuertes sospechas desde comienzos de los años noventa, ha sido expresado cartográficamente, de manera aproximada, en una publicación francesa de 1996 (figura V.3).

Si las tentativas de expresar en forma cartográfica las áreas de cultivos ilícitos son bastante numerosas, en las publicaciones tanto colombianas como extranjeras (norteamericanas sobre todo), las variaciones notorias entre un mapa y otro confirman la dificultad de intentos semejantes. Las investigaciones coordinadas en 1994 bajo la responsabilidad de Ricardo Vargas (CINEP) proveen, no obstante, numerosas informaciones (figura IV.1),

cuya credibilidad se basa en un largo y riguroso trabajo de campo, pero que debería hoy en día ser considerado con precaución, teniendo en cuenta los cambios ligados a la política de erradicación de cultivos, y la valorización de nuevas zonas.

De manera idéntica, las cifras sobre la producción de estupefacientes son, a veces, contradictorias según las fuentes porque, muy seguramente, el secreto del que se rodean las organizaciones mafiosas y guerrilleras no permite el conocimiento de sus modalidades de funcionamiento. Esto es evidente en vista de los documentos elaborados por las instancias gubernamentales encargadas de investigar dicho tipo de actividades, tales como la Dirección Nacional de Estupefacientes, (DNE). Destinadas generalmente a una difusión restringida –lo que no ha impedido al periodista Fabio Castillo reproducir una de ellas en sus libros *best-sellers* de 1996 (Fig.VI.2)–, las figuras esquemáticas propuestas por el DNE simplifican hasta el extremo, mediante el solo empleo de flechas, los temas representados (figura VI.3). A pesar de todo, se observa que estos mapas, aunque rudimentarios, aportan informaciones a menudo olvidadas por los autores. Así es el papel –a pesar de todo evidente– de centro jugado por Bogotá (exportación de droga, importación de insumos, blanqueamiento de dinero sucio), cuando la atención de los medios o de la investigación se ha centrado durante largo tiempo en las dos ciudades famosas por sus “carteles”, Medellín y Cali, o sobre los Llanos Orientales, controlados por las guerrillas.

No obstante, es necesario insistir sobre la valiente obstinación mostrada por los investigadores colombianos, que han condenado sin tregua las acciones violentas de los narcotraficantes, a pesar del peligro que esto representaba: muchos de ellos han padecido el exilio o han pagado con sus vidas –como Darío Betancourt– la elección de este tema. Este

⁵⁵ Reyes, Alejandro. “Contra reforma agraria de los narcos”. En: *El Espectador*, marzo 10, 1996, p. 8 A.

Lámina VI: La droga, un fenómeno de difícil acercamiento

Fig. VI.1: R. Vargas, 1994: 217.

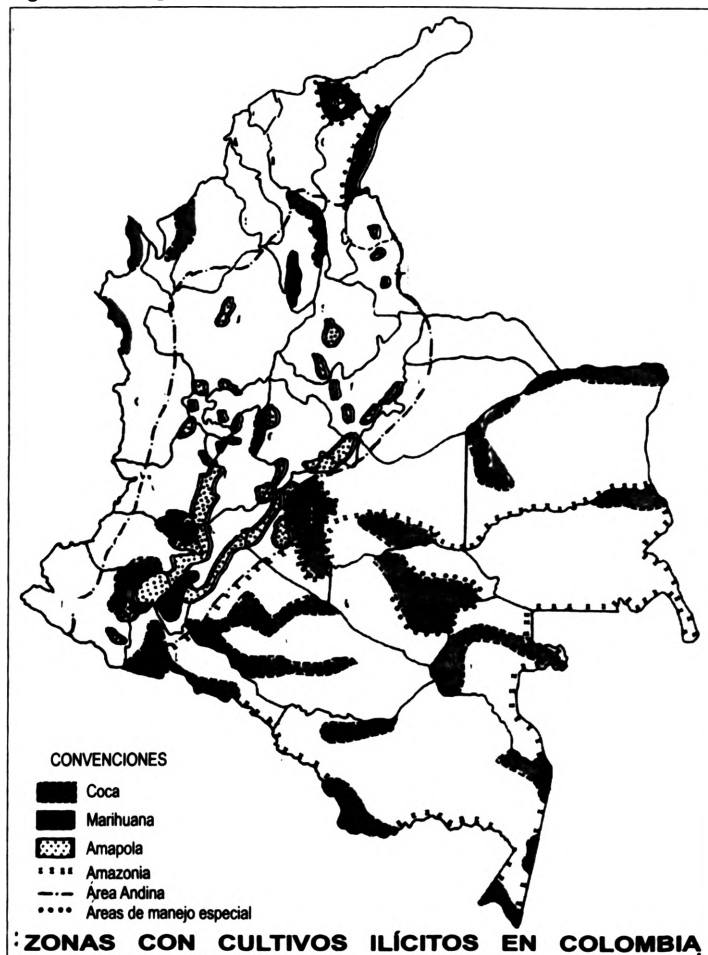


Fig. VI.2: F. Castillo, 1996: 28.

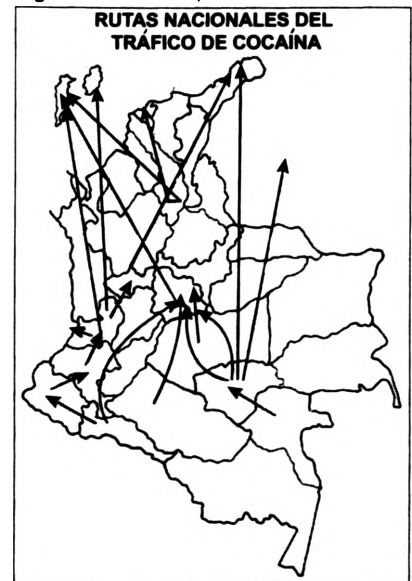


Fig. VI.3: Consejo Nacional de Estupeficientes, 1995: s.p.

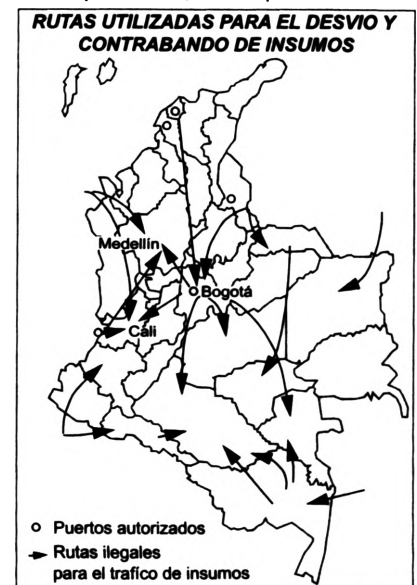
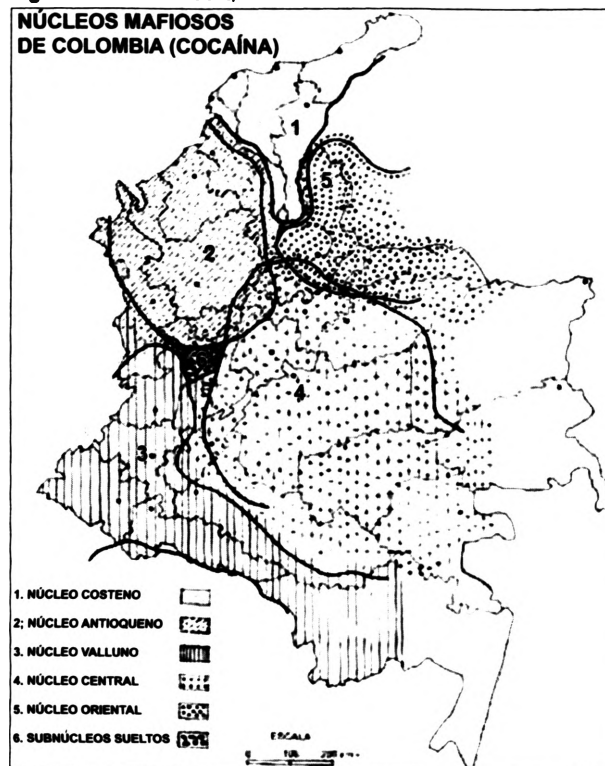


Fig. VI.4: D. Betancourt, 1994: 44.



historiador acumuló, en efecto, un acervo considerable de informaciones sobre el tema, que le permitió caracterizarlo con precisión, inscribiéndolo detalladamente en su contexto histórico regional. Este matiz no aparecía desgraciadamente en el mapa (figura VI.4), que peca por su simplismo, dando la impresión de que los diferentes carteles se habían repartido la totalidad del territorio nacional en esferas de control exclusivo, diseñadas evidentemente sobre el modelo de "áreas de influencia" de las principales ciudades del país.

De las lógicas regionales complejas o el interés de un enfoque territorial

Otra categoría de trabajo sobre la violencia bien representada en Colombia es la de las monografías regionales. Éstas ponen en evidencia cuestiones semejantes a aquellas planteadas en los estudios hechos a escala nacional, revelando que las formas de violencia son, ya, al nivel de una región, múltiples³⁶. Cuando están bien ejecutados y cuando la sutileza de los conflictos locales se ha descifrado convenientemente, estos análisis son de gran riqueza, ya que se puede observar sobre el terreno cómo los factores y los actores "macrosociales", mencionados antes, se entrelazan y entran en interacción.

Subrayaremos tres ejemplos que se han convertido en los clásicos de la geografía de la violencia en Colombia, y han sido objeto de una cartografía interesante: el Tolima, muy frecuentemente estudiado por ser el teatro de los enfrentamientos más sangrientos y más prolongados de la Violencia; el Urabá, que constituye un verdadero caso de investigación sobre los enfrentamientos entre grupos armados, y el sur de Bolívar, una región que es hoy en día muy disputada entre el ELN (que quisiera convertirla en su "zona de despe-

je", según el modelo de las FARC en el Caquetá) y los paramilitares (totalmente opuestos a esa eventualidad).

El examen muy completo llevado a cabo por Guzmán, Fals y Umaña sobre el Tolima durante los años cincuenta demuestra que a las diversas causas inmediatas del conflicto, válidas para el conjunto del país, se deben agregar las múltiples causas regionales, más profundas. Es en este contexto particularmente forzado que se forman las numerosas bandas armadas, comandadas por "caudillos de guerra" que reinaban en la época en ese departamento. Por la delimitación minuciosa de sus áreas de influencia, el mapa presentado por Monseñor Guzmán (figura VII.1) ilustra perfectamente la multiplicidad de estos grupos (de hecho registra 33), que ejercían su control sobre 40 de los 42 municipios del departamento.

En la presentación general de sus zonas de estudio, Sánchez y Meertens³⁷ han llevado más lejos el esfuerzo descriptivo, cartografiando el número de homicidios cometidos (figura VII.2). Tal mapa legitima la elección de los sociólogos de profundizar su análisis del bandolerismo político y social en los lugares más fuertemente afectados. Mientras que la Violencia oficialmente llegó a su fin en 1958, los desórdenes han mostrado la tendencia a perdurar allí donde los combates han sido más fuertes, hasta mediados de los años sesenta, bajo el control de pequeños grupos de bandoleros que, si bien expresaban desde luego la resistencia de "los de abajo" frente a las clases dominantes³⁸, podían desempeñar, por igual, el papel de portavoces del descontento campesino y el de agentes de represión al servicio de la oligarquía local.

Las figuras aquí presentadas pueden dar la impresión de un cubrimiento completo del departamento; la autoridad de cada grupo armado termina donde

⁽³⁶⁾ Pécaut, Daniel. "El desgaste de los clichés". En: *El Tiempo. Lecturas Dominicales*, octubre 9, 1994, p.8.

⁽³⁷⁾ Sánchez, Gonzalo y Meertens, Donny. *Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia*. Bogotá: El Áncora, 1983.

⁽³⁸⁾ Pécaut, Daniel. "Réflexions sur la violence en Colombie". En: Françoise Héritier (Directora.), *De la violence*, Paris: Odile Jacob, 1996, p. 239.

Lámina VII: El Tolima durante la Violencia

Fig. VII.1: G. Guzmán et al., 1962: 47.



Fig. VII.2: G. Sánchez, D.Meertens, 1983: 17.

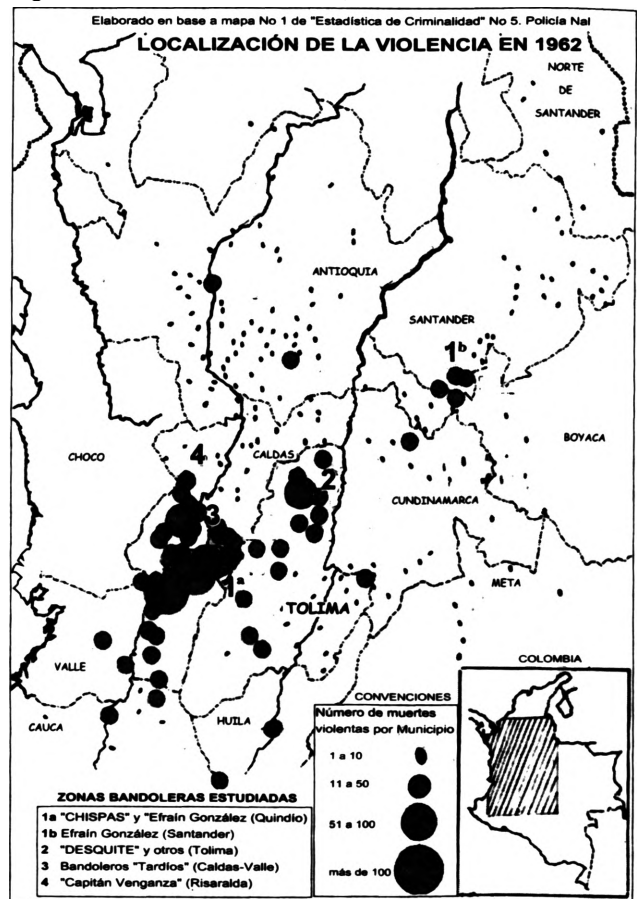
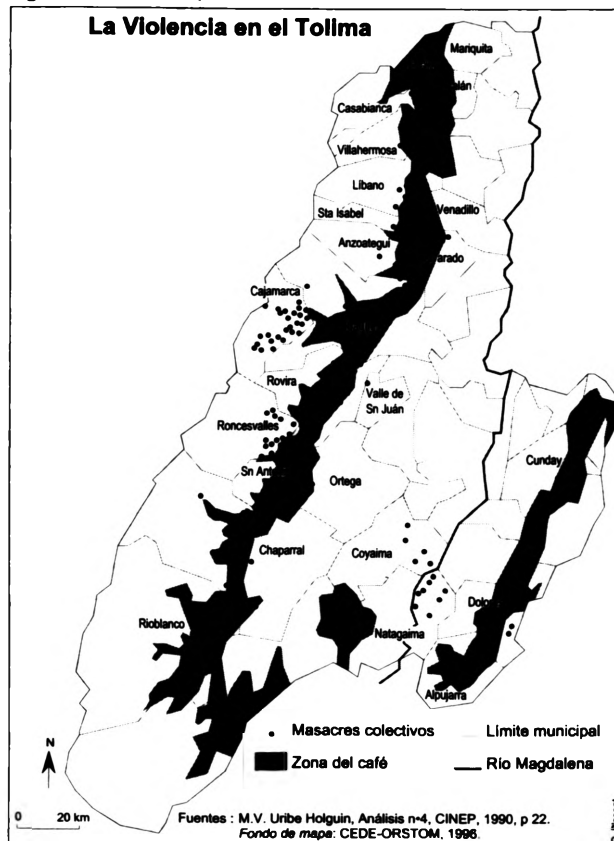


Fig. VII.3: M.V. Uribe, 1990: 28.



comienza la de la otro. En realidad, el mapa elaborado por María Victoria Uribe demuestra, tomando como indicador la "masacre", que los hechos de violencia estaban desigualmente repartidos en el espacio y se concentraban –aparte de los territorios indígenas– en las zonas productoras de café de la cordillera central (figura VII.3). Esta comprobación impulsa a la antropóloga a hacer relativo el peso de los procesos de afiliación partidista o de bandolerismo social, y a orientar su interpretación hacia las causas más prosaicas e individuales, insistiendo en los odios personales: "Los móviles aparentes de estos asesinatos colectivos eran políticos pero detrás de éstos se encontraba, casi siempre, la venganza de la sangre"³⁹. En definitiva, la autora no sigue la huella sugerida por su mapa, de un vínculo entre violencia y propiedad cafetera, aun si el mapa subraya el deseo de usurpar los bienes ajenos (cosechas, ganados, tierras).

En el trabajo realizado por la socióloga Clara Inés García⁴⁰, especialista en Urabá y el bajo Cauca, los mapas hacen parte integral del estudio, y armonizan su análisis del desenvolvimiento histórico de los combates entre las guerrillas, el Estado y los paramilitares. La serie de mapas propuestos (figuras VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.4, VIII.5) facilita enormemente la comprensión del aspecto dinámico de los enfrentamientos, al descomponer las etapas del conflicto y las tácticas sucesivas de los diferentes actores armados para tomar posición en esta región altamente estratégica y, por consiguiente, particularmente conflictiva.

El interés propiamente geopolítico del trabajo cartográfico de García no deja duda alguna. No obstante, la socióloga no menciona la llegada de los combatientes –revelada en estos mapas– al Chocó, pro-

vocado, de hecho, por el repliegue guerrillero frente al avance paramilitar. La autora omite sobre todo una dimensión esencial del conflicto: la lucha que libran los actores armados por el control de los recursos, que aquí como en la mayor parte de las zonas de violencia intensa, constituye un objetivo principal.

Este vacío es, en parte, llenado por la obra dirigida por Jesús Antonio Bejarano⁴¹, en la cual el análisis se centra en el vínculo entre la violencia y la economía. El mapa elaborado para la parte noroccidental del país (figura IX.1), no da, por cierto, información sobre la distribución de los grupos armados que allí existen (objeto de otro capítulo del libro). Éste hace, en cambio, un inventario de las riquezas –producción bananera, ganadería o los cultivos ilícitos– como centro de toda la codicia.

Un último ejemplo regional, significativo de los avances de la cartografía de la violencia, concierne a la mitad sur del departamento de Bolívar, recientemente afectado por los asaltos repetidos de grupos paramilitares o de frentes guerrilleros (figura IX.2). Éste fue extraído de la prensa cotidiana, donde recientemente los mapas abundan, aunque están lejos de estar bien concebidos. A la pregunta planteada en los titulares por el periodista sobre las razones "ocultas" de la concentración de los enfrentamientos en esta zona, la respuesta se inscribe en el mapa: esta región contiene terrenos auríferos en los cuales las minas suministran el 40% de la producción nacional de oro. El sur de Bolívar se localiza en el corredor estratégico conformado por el Magdalena –que constituye una vía de comunicación rápida y poco vigilada por el Estado– y se extiende a lo largo de la cadena montañosa de San Lucas, donde la selva resguarda las plantacio-

³⁹) Uribe, María Victoria. "Bipartismo y masacres en el Tolima durante la violencia". En: *Análisis* No. 4, junio, 1990, p. 23.

⁴⁰) García, Clara Inés. "Antioquia en el marco de la guerra y la paz: transformaciones de la lógica de los actores armados". *Controversia* No. 172, julio, 1998.

⁴¹) Bejarano, Jesús Antonio y otros. *Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales*. Bogotá: Universidad Externado-FONADE, 1997.

Lámina VIII: Los combates entre guerrillas, Estado y paramilitares en Urabá

Fig. VIII.1: C.I. García, 1998: 74.

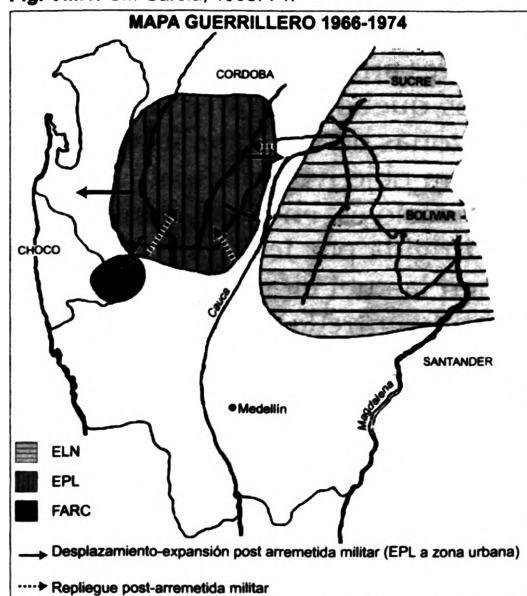


Fig. VIII.2: C.I. García, 1998: 78.

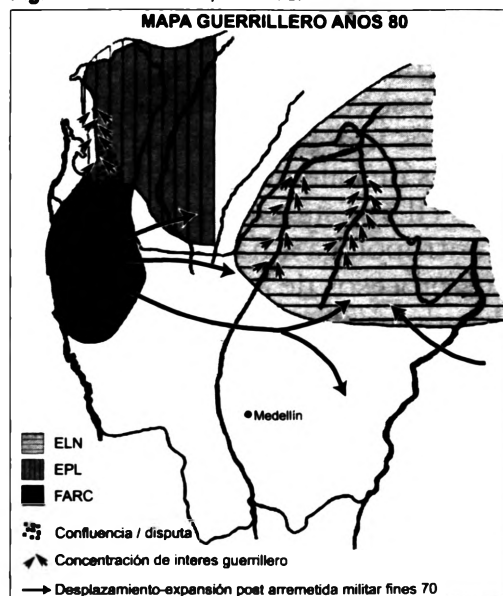


Fig. VIII.1: C.I. García, 1998: 84.

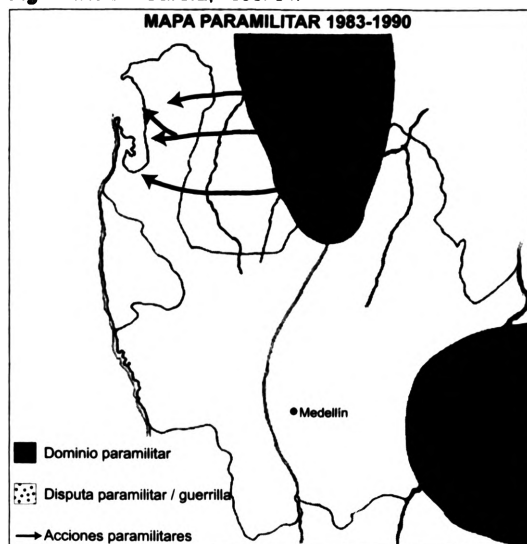


Fig. VIII.2: C.I. García, 1998: 90.

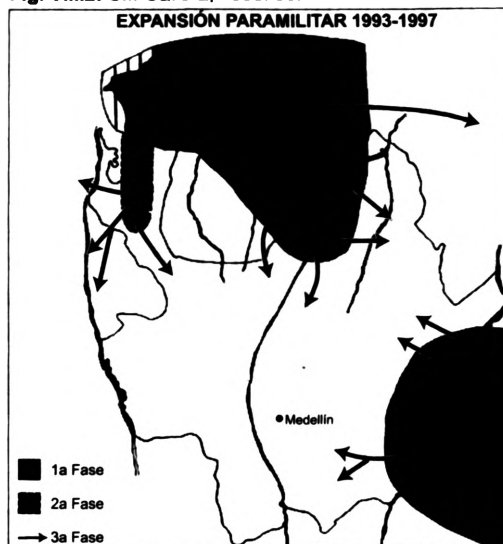


Fig. VIII.1: C.I. García, 1998: 88.



ANÁLISIS POLÍTICO N° 45

O. Plesnat, V. Goulet, 2001.



¿Qué hay detrás del sur de Bolívar?

The map illustrates the military and paramilitary landscape in southern Colombia. Key features include:

- Geographical Labels:** Barranquilla, Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cúcuta, Medellín, Urabá, Antioqueño, Río Cauca, Río Magdalena, Carretera al mar.
- Military Fronts:** Frente 35 de las Farc, Frente 35L de las Farc, Frente 3 ELN, Frente 24 de las Farc, Frente 24 de las Farc.
- Paramilitary Influence:** Zona de influencia paramilitar, CORREDOR DE LA GUERRILLA.
- Gold Mining:** MINAS DE ORO, Se encuentran 32.000 mineros aproximadamente.
- Other Labels:** Santa Rosa del Sur, Santa Rosa de las Farc, Santa Rosa de las Farc.

En la mayoría de los municipios hay tropas del ejército

Sacaron el oro hacia Antioquia

Gráfico: diseño Editorial / EL TIEMPO

nes de coca. Allí, como en el Tolima o en Urabá, la historia local, la posición geográfica y la presencia de riquezas se reúnen, para hacer que esta región y sus habitantes se encuentren aprisionados en el centro de terribles combates.

En verdad, el conflicto colombiano ha adquirido en el transcurso de los últimos años tales dimensiones, y el número de personas asesinadas o desplazadas es tal⁴², que los expertos hablan de una verdadera "guerra contra la sociedad", que en su mayor parte no se identifica con ninguna de las fuerzas en conflicto, encontrándose "rehén" de facciones poderosas e incontrolables⁴³. Este deterioro de la situación se siente hoy en día incluso en las ciudades, antiguamente ajenas al conflicto.

El caso de la violencia en las ciudades

Lugar de segregación social por excelencia, la ciudad es, quizá, el medio donde aparecía más netamente la heterogeneidad de las formas de violencia perpetradas en Colombia, así como la multiplicidad de los actores y de los intereses en juego. Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán, miembros de la "Comisión de estudios sobre la violencia" de 1987, y especialistas en la dimensión urbana del problema son, por otra parte, después de Ortiz, los promotores de la tesis sobre la pluralidad de las violencias, que la comisión en forma unánime hizo suya⁴⁴. Transcurridos diez años, en un artículo titulado "La violencia urbana en Colombia: teorías, mo-

dalidades, perspectivas", los dos sociólogos constatan

... los mayores esfuerzos investigativos y estatales se han dedicado a escudriñar y actuar sobre aquellas variantes que tienen una incidencia directa en el orden público, es decir las violencias ligadas con las prácticas políticas⁴⁵. Menos energía y tiempo se han dirigido a explorar aquella violencia diaria y difusa (...) Y menos esfuerzos aún se han dedicado a tratar de dilucidar las matrices de relaciones que permiten conectar ambas expresiones⁴⁶.

En el transcurso de los años noventa, sin embargo, como consecuencia del avance de la "criminalidad urbana" y, tal vez también, en razón de la exagerada publicidad mediática de la cual ella ha sido objeto, la seguridad ha llegado a ser un tema prioritario en la acción y el discurso de las autoridades municipales, en particular en las grandes ciudades. Una de las primeras dificultades que, se planteaban era la evaluación del alcance de este asunto. Rodrigo Guerrero, entonces alcalde de Cali, resumía así el problema de las grandes ciudades colombianas y se mostraba convencido de que la cuestión exigía, desde luego, una información "confiable" sobre "sus características, determinantes y circunstancias"⁴⁷. En este sentido se han puesto en funcionamiento, más o menos pronto, y más o menos vigorosamente, "observatorios", "células", o "comisiones" encargadas de reflexionar sobre la inseguridad y la violencia "urbana", particularmente produciendo y difundiendo datos precisos y verificables.

⁽⁴²⁾ Mientras que se maneja una cifra de 26.000 homicidios por año entre 1990 y 1999, la cifra de 1,5 millones de refugiados es comúnmente citada –no sin controversia– para referirse a los últimos diez años.

⁽⁴³⁾ Pécaut, Daniel. "Colombie, violence sans fin". En: *Le Monde des débats* No. 17, septiembre, 2000, p. 7.

⁽⁴⁴⁾ Camacho y Guzmán. *Ob.cit.*, pp. 64.

⁽⁴⁵⁾ Contrariamente a esta corriente, heredada de las interpretaciones tradicionales sobre la Violencia, Daniel Pécaut ha defendido enfáticamente la idea de que en la comprensión del conflicto de los años cincuenta se debe tener en cuenta la multiplicidad de esas causas. El sociólogo ha señalado igualmente que se llevaron a cabo luchas intensas en las ciudades entre 1944 y 1948, y que la extensión de los combates a las zonas rurales no se produjo por la represión de las organizaciones populares urbanas. Véase: Pécaut, Daniel. "Quelques réflexions sur le phénomène de 'La Violence' dans les années 1945-1953". En: *Caravelle* No. 26, 1976, pp. 56-57, y Pécaut, Daniel. *L'ordre et la violence: évolution socio-politique de la Colombie entre 1930 et 1953*. Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1987, pp.341-345.

⁽⁴⁶⁾ Camacho y Guzmán. *Ob.cit.*, pp. 13-15.

⁽⁴⁷⁾ Guerrero, Rodrigo. "La violencia y la seguridad en Cali: un enfoque integral y preventivo". En: Eastman, Alberto *et al.* *Ciudad y violencias en América latina*. Quito: Programa de Gestión Urbana, Vol. 2, 1994, p.103.

Lámina X: La violencia homicida en Cali

Fig. X.1: Desepaz, 1998: s.p.

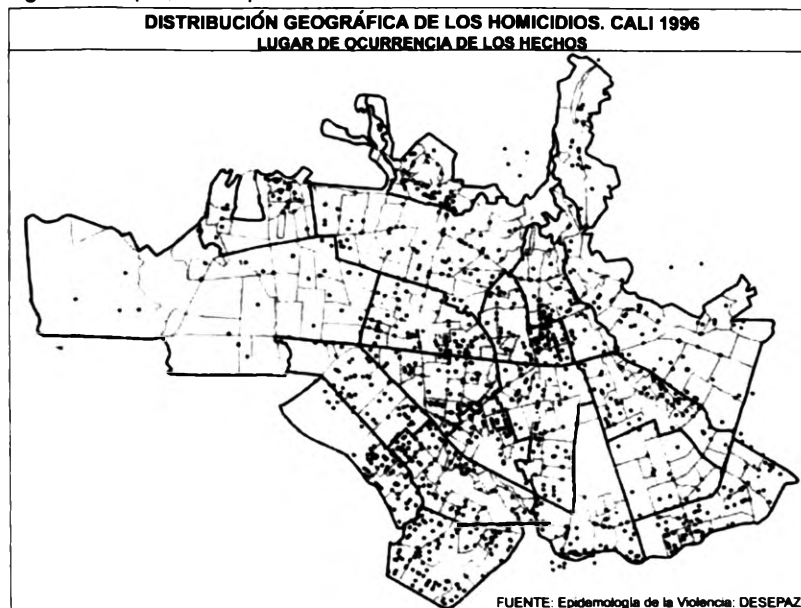


Fig. X.2: Guzmán, 1999: s.p.

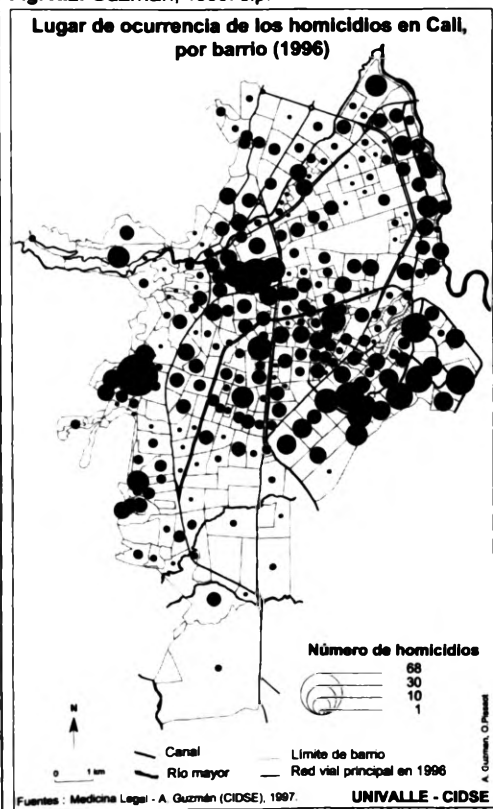
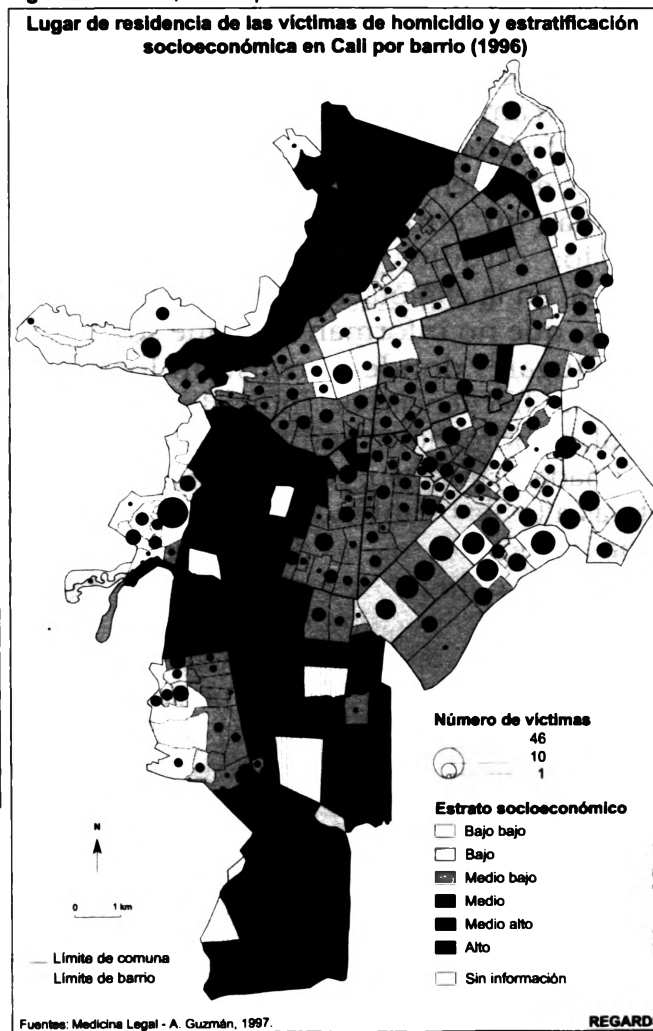


Fig. X.2: Guzmán, 1999: s.p.



Con este objetivo, la Alcaldía de Cali lanzó en 1992 el programa DESEPAZ (Desarrollo, Seguridad y Paz), que asociaba diversas administraciones locales (Policía Metropolitana, Medicina Legal, Concejo distrital...) en la elaboración de un diagnóstico detallado de la situación, cuyos resultados se han publicado cada año desde entonces, esencialmente en forma de mapas. (figura X.1). Observable por primera vez a esta escala, la distribución de los homicidios en la ciudad revela hasta qué punto el conjunto del espacio urbano es tocado. Así mismo, desde un punto de vista estrictamente gráfico, el documento pierde en legibilidad a causa de la excesiva precisión del método de representación.

Por el contrario, el trabajo de Álvaro Guzmán (figura X.2), que agrupa los datos por barrio y recurre a los círculos proporcionales, pone todavía más en evidencia una concentración en la distribución de los hechos registrados, y permite un mejor acercamiento a las causas del fenómeno, facilitando la identificación de las zonas más sensibles. Su trabajo evita, además, un "error ecológico" corriente en los estudios espaciales de la violencia: en la explotación de los datos oficiales, que no informan más que sobre los lugares donde se registran los hechos, las frecuencias del indicador (en general, el homicidio) son, a menudo, relacionadas, sin razón, con las variables relativas a los habitantes de estas zonas, ya que las víctimas no residen obligatoriamente en el lugar de los crímenes y delitos. Por la utilización del número de homicidios –contabilizado de acuerdo con el lugar de residencia de la persona asesinada– Guzmán (figura X.3) pudo, al contrario, analizar con mejor conocimiento los factores de exposición al riesgo, e inferir, en vista de la concentración de víctimas en los barrios periféricos, una

coincidencia de la violencia y de la pobreza, esta última concebida "más que como una causa, como el sector social más vulnerable de la población urbana"⁴⁸. Las conclusiones a las que llega el sociólogo no parecen haber movilizado a las autoridades, puesto que el proyecto social de erradicar la pobreza o de trabajar por la participación popular, prometido en un comienzo en el discurso de la municipalidad, se ha diluido rápidamente, para orientarse desde 1995 hacia una lectura de la violencia que privilegiaba la implantación en la ciudad de los grupos insurreccionales armados⁴⁹.

En el mismo espíritu, el trabajo muy reciente realizado por el grupo de Paz Pública⁵⁰, dirigido por María Victoria Llorente (Universidad de los Andes), muestra que la concentración espacial de los homicidios señalada en Cali por Guzmán se vuelve a encontrar en la capital y, cómo en la cartografía difundida por DESEPAZ aparece estable en el tiempo.

Los resultados acumulados sobre Bogotá por este equipo multidisciplinario conducen a rechazar las interpretaciones que asignan demasiado peso a la violencia "política", a aquella imputada a una improbable "cultura" de los ciudadanos colombianos, o a aquella centrada en las "causas objetivas" de la violencia. La relación aparente entre la distribución espacial de los homicidios –según el lugar de ocurrencia– y aquella de la pobreza medida según la estratificación socioeconómica (figura XI.3), es en parte refutada por una evaluación econométrica llevada a cabo sobre las "necesidades básicas insatisfechas". El debate continúa abierto, pero según los investigadores de Paz Pública, invita, más bien, a señalar como responsables a las estructuras criminales asociadas a las actividades económicas ilegales:

⁽⁴⁸⁾ Guzmán, Álvaro. *Violencia urbana y pobreza*. En: mimeo. Cali, 1999.

⁽⁴⁹⁾ Guzmán, Álvaro. "Violencia urbana: teorías y políticas de seguridad ciudadana". En: Camacho Álvaro y Leal, Francisco. *Armar la paz es desarmar la guerra*. Bogotá: IEPRI-FESCOL-CEREC, 1999, p. 182.

⁽⁵⁰⁾ Además de María Victoria Llorente, este grupo está compuesto por Camilo Echandia, Rodolfo Escobedo y Mauricio Rubio.

Lámina XI: La violencia homicida en Bogotá

Fig. XI.1 y XI.2: Echandía, 2000: s.p.

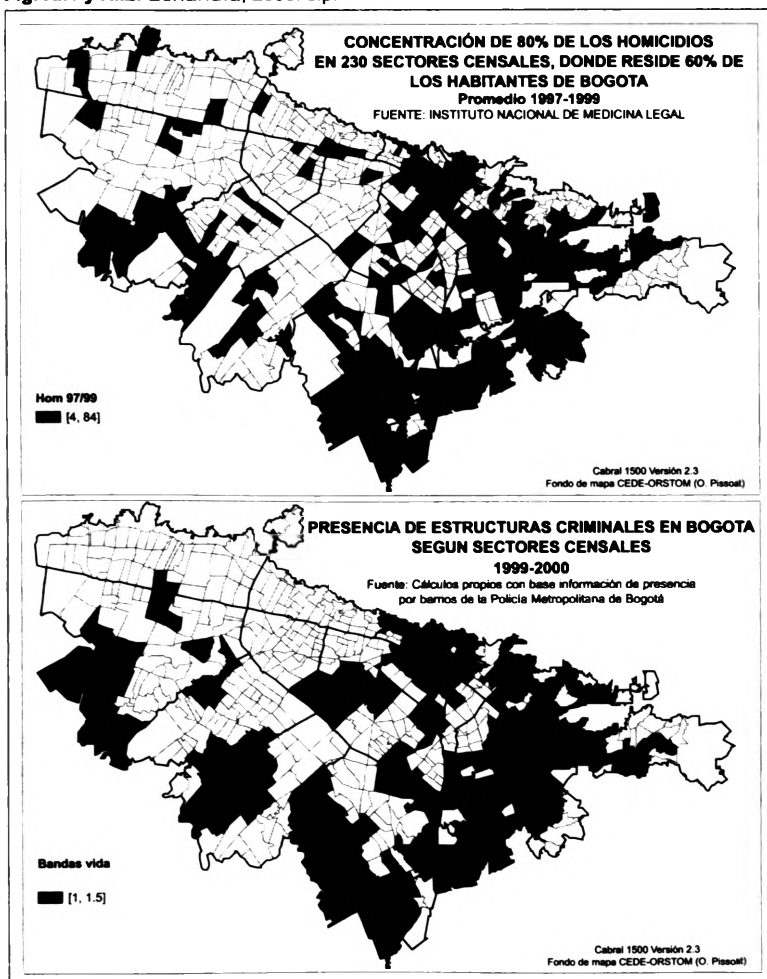
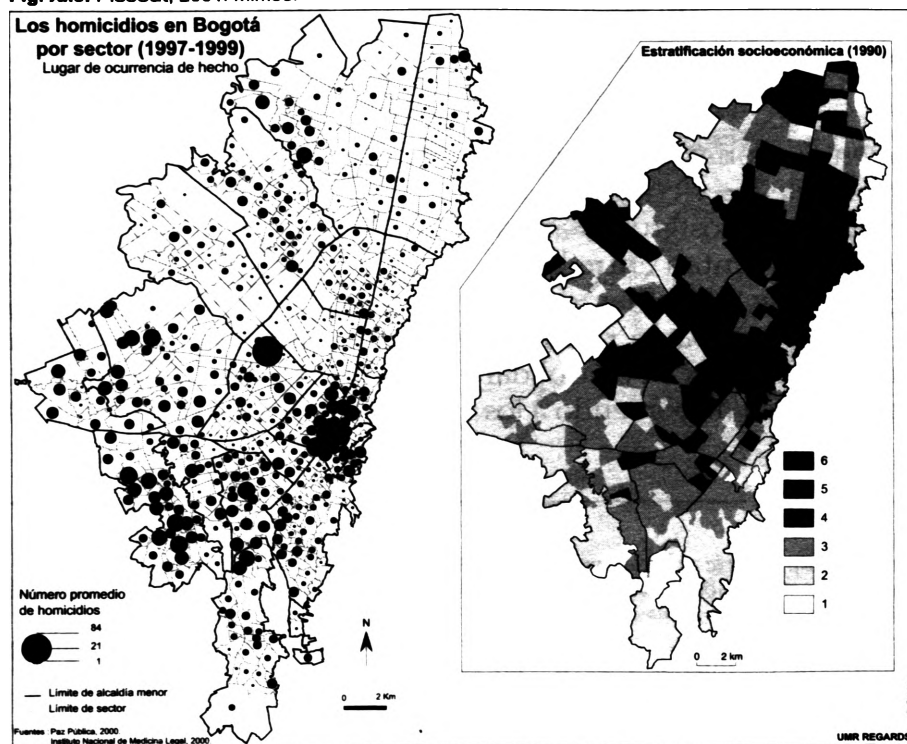


Fig. XI.3: Pissot, 2001: mimeo.



En efecto, cuando se comparan los sectores donde los homicidios son más elevados con los sectores con presencia de organizaciones delictivas, se descubre una alta correspondencia en la geografía de ambos fenómenos, lo que a su vez sugiere que la violencia tendría una muy estrecha relación con la presencia de dichas organizaciones y sus actividades al margen de la ley⁵¹.

En este sentido, la política de la Alcaldía, centrada sobre todo en la educación de los habitantes y en la represión al porte de armas o al consumo de alcohol, es claramente criticada. Los autores invitan a las autoridades de Bogotá a imponer medidas focalizadas en ciertas partes de la ciudad y grupos sociales particulares, en vez de trazar una política tendiente a modificar el comportamiento del conjunto de la población⁵².

Los estudios sobre la violencia en las ciudades se desarrollan a medida que el conflicto armado se vuelve cada vez más prosaico y que la delincuencia común es denunciada como un azote, que debe combatirse con mayor prontitud. Pero si la población urbana se siente todavía más preocupada por el fenómeno, es también porque ella ya no puede ocultar los enfrentamientos perpetrados en los campos, en vista del número creciente de personas que llegan a la ciudad para refugiarse.

De los campos bajo presión, de los campesinos desplazados

De hecho, en las zonas rurales sobre todo, la mayoría de las víctimas de los enfrentamientos entre los grupos armados organizados se cuentan entre la población civil y no en las filas de los beligerantes, que se combaten raramente de manera directa y buscan consolidar su influencia territorial imponiendo a los

habitantes compromisos de fidelidad. La táctica de terror practicada más que todo por las bandas paramilitares, que busca estimular el abandono de los ocupantes de sus parcelas, responde, además, a una estrategia de control y de reapropiación del espacio. La expulsión de los campesinos y la emigración forzada hacia zonas menos violentas no son fenómenos nuevos en Colombia. Éstos adquieren, no obstante, hoy en día, un nivel "gigantesco"⁵³, llevando a un número creciente de investigadores (del ámbito universitario o de ONG, a menudo religiosas), a interesarse en el tema, que atrae, por lo demás, una atención constante de los organismos internacionales que se ocupan con solitud de los derechos humanos.

Los primeros inventarios estadísticos que enumeran los refugiados de la "nueva violencia" se han reunido a partir de una publicación de la Conferencia Episcopal de 1994⁵⁴. Antes, pocos trabajos se concentraron en el análisis del problema, entre ellos los del CINEP y de Flor Edilma Osorio⁵⁵. La representación cartográfica propuesta por esta última (figura XII.1) indicaba el carácter aproximativo, en términos cuantitativos, de la percepción de la cuestión al comienzo de los años noventa. La autora lo reconocía indicando que las cifras disponibles podían oscilar entre 30.000 y un millón de personas desplazadas en el transcurso de los años ochenta⁵⁶. Sin embargo, aunque resumido, el mapa demuestra que

las zonas de salida, aunque cubren la mayoría del territorio nacional, corresponden a los espacios en que se desarrollan combates y operativos militares contraguerrilla y contranarcotráfico, donde hay presencia activa de fuerzas guerrilleras y donde accionan grupos paramilitares. (...) Las zonas de llegada son

⁽⁵¹⁾ Echandía, Camilo. *Geografía de la violencia homicida en Bogotá*. Bogotá: Paz Pública - CEDE, Informe de avance, 2000.

⁽⁵²⁾ Llorente, María et al. "Violencia homicida y estructuras criminales en Bogotá". En: *Análisis Político* No. 44, septiembre-diciembre, 2001.

⁽⁵³⁾ Cubides, Fernando y Domínguez, Camilo (editores). *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales*. Bogotá: CES -Ministerio del Interior, 1999, p. 17.

⁽⁵⁴⁾ *Ídem.*, p. 17.

⁽⁵⁵⁾ Osorio, Flor Edilma. *La violencia del silencio, desplazados del campo a la ciudad*. Bogotá: CODHES, 1993.

⁽⁵⁶⁾ *Ídem.*, p. 32.

Lámina XII: El estudio de los desplazados se precisa

Fig. XII.1: Osorio, 1993: 34.

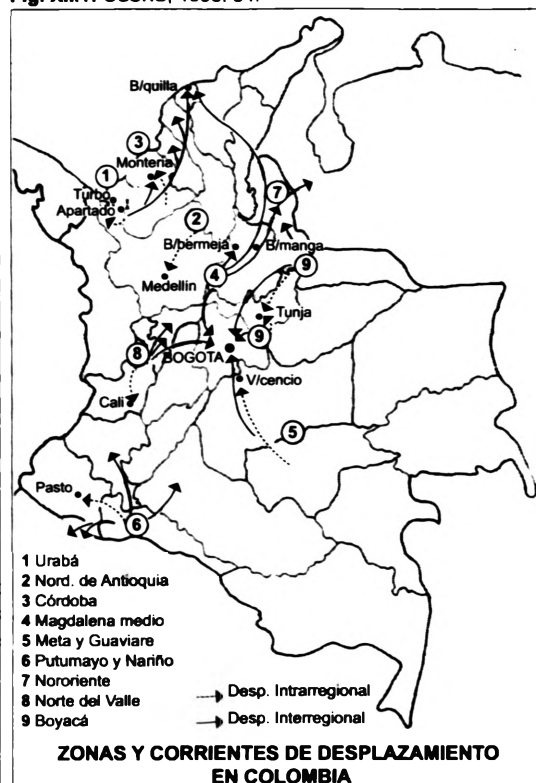


Fig. XII.2: Puyana, 1999: 226.

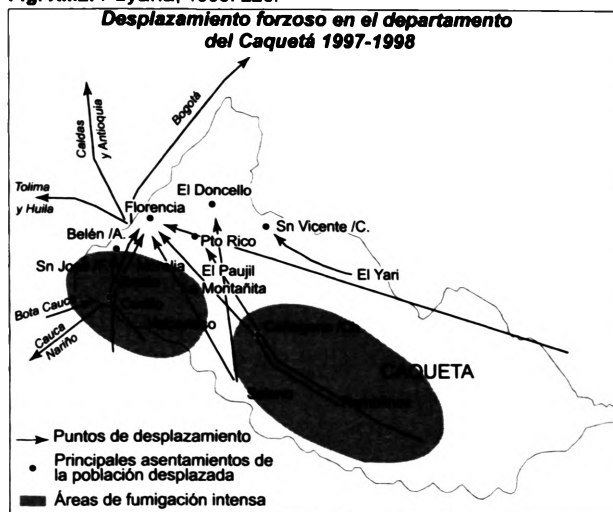


Fig. XII.3: Gracia, 1999: 160.

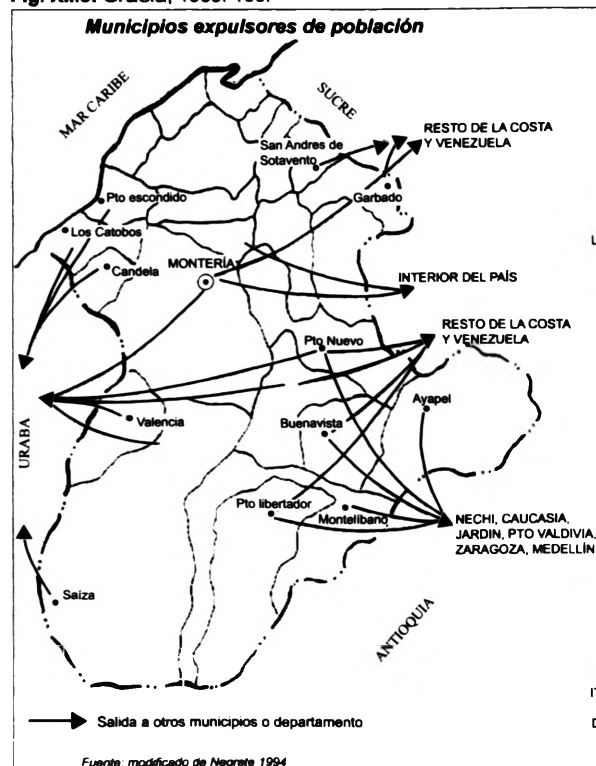
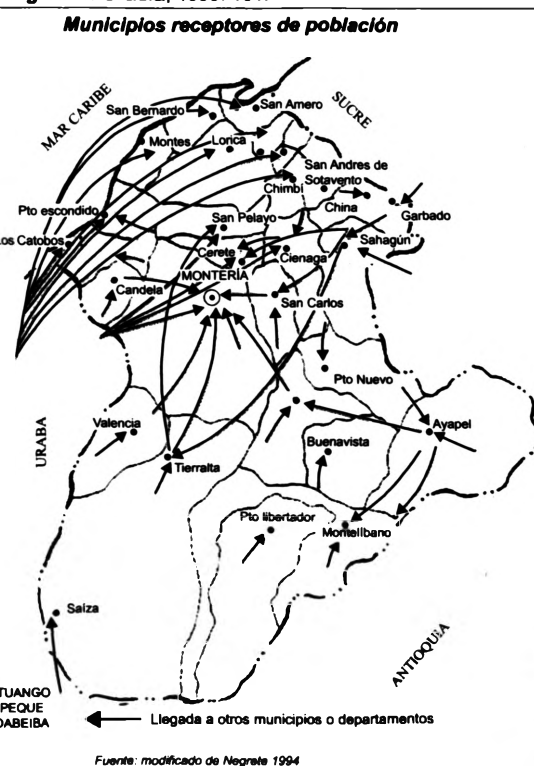


Fig. XII.4: Gracia, 1999: 161.



básicamente centros urbanos en los cuales la densidad poblacional puede reportar cierto anonimato y seguridad física⁵⁸.

Los desplazamientos de poblaciones pueden también ser promovidos por la lucha contra el tráfico de estupefacientes, aun si los métodos empleados son considerados como legítimos por el gobierno. Es el caso de las campañas de fumigación de los cultivos ilícitos, como busca probarlo, con un mapa como soporte, la socióloga Aura María Puyana (figura XII.2). Una política de erradicación análoga, estimulada por Estados Unidos, priva, de hecho, a los pequeños productores de una fuente de ingresos vitales para ellos –sin proponerles una alternativa inmediata rentable–, engendra graves daños ecológicos y arrastra a familias enteras a un nuevo tipo de éxodo rural.

Según Jorge Gracia⁵⁹, el departamento de Córdoba constituye un ejemplo muy representativo de estos nuevos flujos de poblaciones que él analiza, bastante raro para ser notado, utilizando numerosas figuras explicativas (esquemas, planos, mapas, a veces tridimensionales). La cartografía elaborada por el geógrafo demuestra que los desplazamientos forzados provienen sobre todo de las zonas rurales para dirigirse hacia las cabeceras municipales y más todavía hacia la capital departamental, Montería (figuras XII.3 y XII.4). Según el autor, los actores armados ejercen un “control absoluto de la vida en los sectores rurales”. Esta dominación “totalitaria”, en la medida en que los habitantes no pueden sustraerse de ella, “penetra absolutamente todos los aspectos de la vida cotidiana”⁶⁰, se encuentra en el origen de un cambio drástico de la distribución de la población, cuyas características, registradas por Gracia para el periodo reciente, son similares a las señaladas por Osorio para

la década anterior (tipo de espacios involucrados, responsables identificados).

Los mapas reproducidos aquí confirman, pues, un conocimiento del fenómeno que se precisa con el tiempo. Estos dan, por otra parte, cuenta del estado de confusión y de desorganización que ha provocado en los campos lo que Clara Inés García no vacila en llamar la “guerra en Córdoba-Urabá”⁶¹; una situación que contribuye a concentrar cada vez más a la población en una región ya de por sí poco poblada. Montería, la capital departamental y el destino favorito de los refugiados, presentaba en 1994, 34 barrios de autoconstrucción reciente, en los cuales, el 30% de sus habitantes eran refugiados.

Tal evolución, provocada por el apremio y la violencia, no sólo es dramática para las poblaciones afectadas: es perjudicial para el desarrollo tanto de los campos como de las ciudades afectadas.

CONCLUSIÓN

La cartografía de la violencia en las ciencias sociales colombianas ha evolucionado con el tiempo. En primer lugar, simples ilustraciones de los propósitos de los investigadores, los escasos mapas publicados a todo lo largo de las décadas del sesenta y setenta se limitaban a suministrar un inventario regional de los hechos de violencia estudiados, sin profundizar verdaderamente en la reflexión acerca de los espacios afectados, a imagen de la obra pionera dirigida por Monseñor Guzmán, donde la inscripción espacial de los combates fue abordada de manera bastante superficial. Esta crítica puede por cierto estar matizada para 1962, pues en la época los datos disponibles a escala municipal eran fragmentarios, pero de todos modos es significativo que el

⁽⁵⁸⁾ *Ídem.*, p. 33.

⁽⁵⁹⁾ Gracia, Jorge. “Conflictos territoriales y desplazamiento en el litoral Caribe colombiano y el Sinú”. En: Cubides Fernando y Domínguez Camilo (editores). *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales*. Bogotá: CES - Ministerio del Interior, 1999.

⁽⁶⁰⁾ *Ídem.*, pp. 159-163.

⁽⁶¹⁾ García. *Ob.cit.*, p. 85.

sociólogo, con el fin de caracterizar las zonas que él ha examinado particularmente, se haya contentado simplemente con enumerar algunas indicaciones económicas heterogéneas y pintar a grandes trazos las cualidades generales (aun caricaturescas) de los habitantes⁶².

A partir del fin de los años ochenta, las representaciones cartográficas, cada vez más numerosas, han sido progresivamente apropiadas por los autores, y se han convertido para algunos en una parte integral de su razonamiento. Concebidas como herramientas de investigación, estas representaciones geográficas han participado en una mejor percepción del problema, particularmente permitiendo el rechazo o, por el contrario, apuntalando las interpretaciones propuestas (de manera a veces excesiva: la coincidencia espacial de dos fenómenos no prueba evidentemente la correlación efectiva). Acompañando los avances en el conocimiento del tema, la utilización creciente del mapa en el análisis de las violencias –cualquiera sea el tipo– muestra hasta qué punto los expertos colombianos (investigadores y encargados de la toma de decisiones) progresivamente han dirigido su atención sobre los territorios así identificados. Por otra parte, del mismo modo el papel del espacio en tanto tal ha sido finalmente cuestionado, ya que Fernando Gaitán concluye en 1997 su revisión de los factores de violencia, separando –sin duda muy rápidamente– toda implicación de las especificidades locales en la explicación de las tasas de homicidios observadas en el país.

Más allá del avance de la informática, la proliferación de mapas sobre las violencias en Colombia debe igualmente incluirse junto con la evolución de la coyuntura política, del entorno científico y de la demanda social. El lugar reconocido a los unos y a los otros en el análisis del fenómeno está, en efecto, modificado por la duración, especialmen-

te en el transcurso del periodo reciente. Gracias a un movimiento de democratización creciente, el poder de la palabra se ha visto facilitado, en particular a propósito de este dominio antes más bien reservado a los militares a cargo del manejo del orden público. En un contexto institucional favorable, las universidades (para las cuales la verificación de las hipótesis y la difusión de las interpretaciones son un objetivo en sí mismo) y las ONG (a menudo militantes) han podido adentrarse plenamente en el estudio de este tema y trabajar por una mejor información de la población, particularmente por las publicaciones hoy más frecuentes en la prensa. Los colombianos toman, además, conciencia de su necesaria implicación en los procesos de solución de los conflictos.

Hoy, pues, la cartografía, en adelante inflexible en tanto que apoyo gráfico –revolución obligada de la imagen– pero también pedagógica, se difunde en los trabajos destinados a una audiencia cada vez más sensible a las diversas formas de violencias. El peso de la opinión pública puede, por lo demás, desempeñar en cambio un papel importante. En Bogotá, por ejemplo, aunque todas las fuentes oficiales concuerdan en una baja importancia de la violencia durante el transcurso de los últimos años, la sensación de inseguridad aumenta. Esta representación popular influye en los análisis del fenómeno, pero no será sino en la medida en que las autoridades municipales (en una lógica que no está, sin duda, desprovista de intencionalidades electorales) dediquen todavía mayores fondos para financiar estudios, que podrían difundirse de inmediato al público, con el apoyo de los mapas, la mayoría de las veces exactos, pero en ocasiones alarmistas.

De hecho, el mapa no es más que una representación de lo real. El mapa no puede ser totalmente objetivo y sugie-

⁶²) Guzmán, Germán. *Ob.cit.*, pp. 118-137.

re, por el contrario, indicaciones sobre el punto de vista personal, reivindicado o no, de su autor. Hemos tratado de demostrarlo, el mapa puede ocultar informaciones, referencias exageradamente privilegiadas o, por el contrario, omitidas por el investigador, y dar lugar a interpretaciones que varían según

la óptica escogida por su autor (o su lector). La fórmula Rémi Caron, famosa entre los geógrafos franceses: "El mapa no es el mundo: no es más que la mirada que un hombre ha posado, un día, sobre él"⁶³, sobre todo para un tema como la violencia en Colombia, no puede ser desmentida.



⁶³ Caron, Rémi. "Les choix du cartographe". En: *Cartes et figures de la terre*. Paris: Centre George Pompidou, 1980.